

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

## PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 1004 DE 2025

**“Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones”**

### I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El objeto del Proyecto de Acuerdo es la expedición del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones.

El proyecto es presentado por el Gobierno Distrital, a través de la Secretaría de Hacienda Distrital, para la discusión y consideración del Honorable Concejo de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital (Decreto Distrital 714 de 1996).

El proyecto de acuerdo, además de contener el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gastos, incluye el Resultado Fiscal y las disposiciones generales para la vigencia.


### II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Al ser un proyecto de acuerdo de presupuesto, que se presenta con base en las normas del Estatuto Orgánico de Bogotá, sus antecedentes pueden rastrearse año tras año en la presentación del mismo. A continuación, se presentan los presupuestos aprobados por el Concejo de Bogotá para cada vigencia anual de 2020 a 2026, con énfasis en el monto total aprobado, los cinco sectores (carteras) con mayor apropiación de recursos, sus variaciones interanuales y una comparación de la evolución sectorial. Todas las cifras se dan en pesos colombianos corrientes (billones de pesos, sin ajuste por inflación).

#### Presupuesto 2020

Total aprobado: 21,06 billones de pesos para la vigencia 2020. De este total, aproximadamente 17,2 billones (81.6%) corresponden a gastos de inversión, y 3,8 billones a funcionamiento y servicio de la deuda.

Sectores con mayor asignación (top 5): El presupuesto 2020 priorizó principalmente Movilidad, Educación, Salud, Integración Social y Hábitat. En particular, Movilidad fue el sector

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

con la mayor apropiación de recursos, con 5,2 billones (aprox. 30% de la inversión) destinados a proyectos de transporte (incluyendo cofinanciación de la primera línea del Metro y troncales de TransMilenio). Le siguieron Educación con 3,9 billones, Salud con 2,7 billones, e Integración Social y Hábitat con 1,3 billones cada uno. Otros sectores con asignaciones importantes en 2020 fueron Cultura (~0,6 billones) y Seguridad (~0,4 billones), aunque por debajo de los cinco principales mencionados.


**Contexto:** El presupuesto de 2020 fue formulado al final de la administración anterior e incluía una fuerte inversión en infraestructura de movilidad (Metro y troncales) junto con altas partidas para educación y salud. Si bien 2020 marcó el inicio de la nueva administración (Alcaldía de Claudia López desde enero de 2020), las prioridades de inversión reflejaron la continuidad de obras estratégicas ya en marcha (más de 2.500 obras en ejecución o por iniciar). Este presupuesto sentó la base financiera para dichos proyectos y programas sociales clave del Plan de Desarrollo vigente.

## **Presupuesto 2021**

**Total aprobado:** 23,9 billones de pesos para 2021, lo que representó un incremento del ~13% frente al presupuesto inicial de 2020 (21,06 billones). Del total 2021, 20,1 billones se destinaron a inversión (84% del presupuesto) y 3,2 billones a funcionamiento, más \$577 mil millones al servicio de la deuda.

**Sectores con mayor asignación (top 5):** Más del 80% de los recursos de inversión 2021 se concentraron en Educación, Salud, Movilidad, Integración Social y Cultura. Este enfoque reflejó el carácter “social” del presupuesto 2021, orientado a la reactivación económica y rescate social tras el impacto de la pandemia. En ausencia de ajustes por inflación, se observó una redistribución notable de prioridades respecto a 2020:

- Educación mantuvo el primer lugar en inversión social, con un monto cercano a 4,7 billones (aprox. 31% de la inversión) según proyecciones oficiales, apoyando cobertura educativa y continuidad de programas como alimentación escolar.
- Salud aumentó significativamente hasta alrededor de 3,4 billones (22% de la inversión), fortaleciendo la atención en pandemia (hospitales, dotación y salud pública).
- Movilidad tuvo una reducción importante a cerca de 3,2 billones (21% de la inversión comparado con 2020, posponiendo algunos proyectos de obra para priorizar gasto social de emergencia.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

- Integración Social se mantuvo en torno a 1,2 billones, financiando programas para población vulnerable (transferencias monetarias, atención a adultos mayores, etc.).
- Cultura, Recreación y Deporte ingresó entre los cinco mayores en 2021 con aproximadamente 0,8–0,9 billones, superando ligeramente al sector Hábitat este año.


**Variaciones interanuales:** Se evidencia en 2021 una reorientación del gasto hacia sectores sociales. Por ejemplo, Educación creció ~20% y Salud ~25% en términos nominales frente a 2020, mientras que Movilidad se contrajo alrededor de -38% (pasando de 5,2 a ~3,2 billones) para liberar recursos hacia el “rescate social”. Esta decisión respondió al fuerte impacto económico y social del COVID-19, priorizando inversión en salud pública, empleabilidad e inclusión social por encima de nuevas obras de infraestructura. Cultura recibió un impulso relativo (no previsto en 2020 entre las mayores asignaciones) para apoyar la reactivación del sector artístico y recreativo. En contraste, el sector Hábitat/Vivienda tuvo una asignación menor en 2021 (por debajo de cultura), reflejando la postergación de algunos programas de vivienda en favor de la atención inmediata de la emergencia social.

## **Presupuesto 2022**

**Total aprobado:** 28,5 billones de pesos para 2022, con un crecimiento cercano al 19% frente a 2021. Del total, 24,36 billones (85%) se destinaron a inversión; 3,44 billones (12,1%) a funcionamiento; y 0,7 billones (2,5%) al servicio de la deuda. Este presupuesto fue considerado expansivo, apalancado por mayor recaudo y un cupo de endeudamiento aprobado en 2020 para impulsar la reactivación económica.

**Sectores con mayor asignación (top 5):** En 2022 se fortalecieron tanto la inversión social como las obras de movilidad, concentrando estas áreas el grueso del presupuesto. Según la Secretaría de Hacienda, los sectores con mayor apropiación fueron:

- Movilidad: 8,6 billones de pesos (aprox. 33% de los recursos de inversión). Esta fue la partida más alta, destinada a proyectos estratégicos de transporte: continuación de la primera línea del Metro, troncales de TransMilenio (Av. 68 y Av. Ciudad de Cali), Regiotram, cables aéreos y mejoras viales. Muchos de estos recursos provinieron de crédito y venta de activos autorizados, dentro del cupo de endeudamiento del Acuerdo 781 de 2020.
- Educación: 5,4 billones (segunda mayor asignación), orientados a ampliación de cobertura, infraestructura educativa (colegios nuevos y mejorados) y programas

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

como matrículas gratis y apoyos a educación superior. Educación representó cerca del 22% de la inversión total.


- Salud: 3,1 billones, manteniendo una alta participación para fortalecer la red hospitalaria (ej. nuevo Hospital de Bosa con vigencias futuras aprobadas) y la atención en salud post-pandemia.
- Integración Social: 1,8 billones, incluyendo importantes fondos para transferencias monetarias a hogares pobres (Ingreso Mínimo Garantizado) y servicios sociales territoriales.
- Gobierno (Fondos de Desarrollo Local): ~1,3 billones, destinados a las 20 localidades para inversión en proyectos barriales y seguridad ciudadana.

Además, Hábitat (vivienda y urbanismo) contó con alrededor de 0,9 billones y Ambiente con 1,1 billones, montos menores comparados con los cinco sectores principales. Cultura y Deporte recibió aproximadamente 0,6–0,7 billones.

Variaciones interanuales: El presupuesto 2022 marcó un repunte notable en inversión en Movilidad, que prácticamente se triplicó respecto a 2021 (de ~3,2 a 8,6 billones), reactivando proyectos de infraestructura aplazados durante la pandemia. Este aumento de más de 5 billones (financiado con deuda e ingresos extraordinarios) reflejó la confianza en la recuperación económica. Educación también creció (~15% nominal), pasando de ~4,7 a 5,4 billones, y Salud mantuvo un nivel similar (ligera variación a la baja, de ~3,4 a 3,1 billones, debido a que en 2021 hubo gastos extraordinarios COVID). Integración Social aumentó en términos absolutos (de ~1,2 a 1,8 billones, +50%), consolidando programas sociales permanentes (p. ej. transferencias a población vulnerable) más allá de la crisis sanitaria. En suma, todos los grandes sectores recuperaron o superaron sus niveles pre-pandemia, con un balance 2022 enfocado tanto en infraestructura para el desarrollo económico como en inversión social para la reducción de pobreza.

### **Presupuesto 2023**

Total aprobado: 31,5 billones de pesos para 2023, equivalente a un incremento aproximado del 10% sobre 2022. Dado que el Concejo no votó en plazo, el presupuesto se expidió mediante el Decreto 571 de 14/12/2022. La distribución fue: 26,1 billones a inversión (82,8%), 3,9 billones a funcionamiento (12,3%) y 1,6 billones a deuda (4,9%).


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Sectores con mayor asignación (top 5): El presupuesto 2023 se caracterizó por la mayor inversión social de la historia de Bogotá hasta ese momento. Según la Alcaldía, el 51% de los recursos de inversión se destinó a Educación, Salud, Integración Social y Hábitat, mientras que 33% se asignó a Movilidad. En conjunto, estos sectores estratégicos concentraron ~84% de la inversión. Los montos aproximados (según participación reportada) fueron:

- Educación: ~6,2 billones (alrededor del 24% del presupuesto total, y 34% de la inversión) – financió la continuidad de la inversión social en colegios (nuevas instituciones, mejoramiento de infraestructura) y servicios como alimentación escolar. Este fue el sector con mayor asignación individual en 2023.
- Movilidad: ~8,6 billones (aprox. 28% del total invertido). Si bien representa un porcentaje algo menor que el año anterior, siguió siendo de las mayores partidas para avanzar con las obras claves de transporte (Metro, troncales BRT, cables, etc.) en ejecución.
- Salud: ~3,6 billones, para consolidar la construcción y dotación de hospitales locales (hospitales de Usme y Bosa en marcha) y fortalecer la atención primaria. Equivalió a cerca del 14–15% de la inversión.
- Integración Social: ~1,8–1,9 billones, manteniendo recursos para programas sociales de niñez, vejez y lucha contra la pobreza (Bogotá Solidaria). Representó alrededor del 7% de la inversión.
- Hábitat: ~1,3–1,7 billones (estimado en torno al 5% de la inversión). Incluyó proyectos de vivienda de interés social, mejoramiento de barrios y servicios públicos domiciliarios.

Asimismo, el sector Gobierno (incluyendo seguridad y fondos locales) y Cultura conjuntamente absorbieron alrededor del 10% de la inversión. Cabe destacar que en 2023 la administración distrital (bajo la alcaldesa Claudia López) priorizó sacar a 624.000 personas de la pobreza con este presupuesto social expansivo, previendo bajar la pobreza extrema a 4,8% (por debajo de niveles pre-Covid) mediante programas de transferencias monetarias concurrentes con la Nación.

Variaciones interanuales: Entre 2022 y 2023 se dio continuidad al impulso inversor. Educación aumentó su participación (de 5,4 a ~6,2 billones, +15%), convirtiéndose por primera vez en el mayor rubro individual del presupuesto. Hábitat tuvo también un refuerzo considerable (se estima creció del orden de 30–40% respecto a 2022), alineado con la entrega

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


de más subsidios de vivienda y mejoramientos de vivienda popular. Movilidad se mantuvo alta en términos absolutos (~8,6 billones ambos años) pero bajó levemente su proporción relativa de la torta de inversión (de 33% a 28%), dado el mayor peso de lo social. En suma, 2023 consolidó un giro hacia la inversión social: más de la mitad de los recursos distritales fueron a “inversión social” (educación, salud, integración, vivienda), logrando el nivel más alto de gasto social nominal en la historia distrital hasta entonces.

## Presupuesto 2024

Total aprobado: 33,2 billones de pesos para 2024. Esto fue apenas un 3,2% superior al presupuesto 2023, marcando una moderación en el crecimiento presupuestal. La aprobación se dio en plenaria del Concejo el 6 de diciembre de 2023 (Acuerdo Distrital 923 de 2023). La distribución acordada fue: 26,41 billones a inversión (79,5%), 4,65 billones a funcionamiento (14,0%) y 2,13 billones a servicio de deuda (6,4%).

Sectores con mayor asignación (top 5): El presupuesto 2024 fue el último de la administración Claudia López y mantuvo la prioridad en inversión social. De hecho, la inversión social (Educación, Salud, Integración Social y Hábitat) sumó \$14,7 billones, equivalente al 56% de los recursos de inversión. El sector Movilidad continuó como el otro gran destinatario, con \$7,4 billones (~28% de la inversión), y el sector Gobierno (incluyendo seguridad y fondos locales) recibió alrededor de \$1,8 billones. En resumen, los cinco mayores rubros de 2024 fueron:

- Educación – junto con Salud, Integración y Hábitat (los cuatro sectores sociales combinados \$14,7 billones) representó más de la mitad de la inversión. Educación siguió siendo el rubro individual más alto; aunque no se desglosa en la fuente, se estima alrededor de 6,5–7 billones para este sector en 2024.
- Salud – parte de la inversión social prioritaria; su presupuesto continuó en crecimiento moderado (estimado cerca de 4 billones en 2024).
- Integración Social – reforzada en los debates del Concejo con adiciones; alcanzó cerca de 2,0–2,3 billones (estimado) para robustecer programas sociales locales.
- Hábitat – 1,2 billones aprobados inicialmente, enfocados en vivienda de interés social y mejoramiento barrial. Nota: Durante el trámite, el Cabildo incrementó los fondos de Hábitat en favor de programas de vivienda, anticipando prioridades de la siguiente administración (se habla de +41% en este sector para 2025).

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

- Movilidad – 7,4 billones aprobados, asegurando la financiación continua de obras de infraestructura en curso (Metro línea 1 con 25% de avance, licitación de la línea 2 del Metro, troncales de TM, cables aéreos de San Cristóbal y Potosí, ampliación de la Av. 68 y Av. Ciudad de Cali, etc.).

Estos cinco sectores (educación, salud, integración, hábitat y movilidad) absorben la mayor parte del presupuesto 2024. Los recursos restantes se distribuyeron en Seguridad y Convivencia, Gobierno local, Cultura y Ambiente, entre otros, ninguno con más de 1,8 billones individualmente.

Variaciones interanuales: 2024 mostró un crecimiento real modesto del presupuesto total. Esto se debió en parte a que la administración saliente ya había ejecutado la mayor parte de su plan de desarrollo, dejando un presupuesto de mantenimiento para la transición de gobierno. Educación, Salud e Integración conservaron niveles similares (con leves incrementos nominales) respecto a 2023, garantizando la continuidad de programas sociales exitosos. Hábitat no aumentó sustancialmente en 2024 (se mantuvo alrededor de \$1,2 billones) pero quedó planteada una expansión para 2025, en línea con las nuevas metas de vivienda de la siguiente alcaldía. Movilidad bajó ligeramente de 8,6 a 7,4 billones (–14% aprox.), reflejando la culminación de la fase de mayor inversión en algunas obras y un reacomodo de tiempos en proyectos como la ampliación de la Calle 13 (cuya licitación quedó desierta a finales de 2023). En síntesis, 2024 consolidó la ejecución de proyectos en marcha y preparó el terreno financiero para el nuevo Plan de Desarrollo 2024–2028, con un énfasis sostenido en inversión social y mantenimiento de infraestructura.

## **Presupuesto 2025**

Total aprobado: 38,4 billones de pesos para 2025, con un crecimiento del ~15% frente a 2024 (33,2 billones). Este fue el primer presupuesto de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán (Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024–2027). Se aprobó el 6 de diciembre de 2024 mediante Acuerdo 842 de 2024, con 38 votos a favor y 7 en contra. La composición aprobada fue: 31,3 billones para inversión (81,4% del total), 5,1 billones para funcionamiento (13,4%) y 2,0 billones para deuda (5,2%).

Sectores con mayor asignación (top 5): De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los sectores que concentraron mayores recursos en 2025 fueron: Movilidad, Educación y Salud. En cifras:

- Movilidad: 9,0 billones – recuperó el primer lugar en asignación sectorial, dado el impulso a nuevas obras de transporte metropolitano. Se priorizó la financiación de



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

480 frentes de obra en movilidad, incluyendo la construcción de cables aéreos, infraestructura del Regiotram de Occidente, nuevos corredores viales y estudios para la segunda línea del Metro.

- Educación: 8,4 billones – el segundo rubro más alto, orientado a garantizar acceso educativo y ampliar programas sociales en colegios y universidades (e.g. más cupos de Jóvenes a la U y fortalecimiento de educación superior). Este monto supone un aumento nominal significativo respecto a 2024, haciendo de educación un pilar clave tanto social como de reactivación económica (empleos en infraestructura educativa).
- Salud: 4,7 billones – continuó creciendo, para invertir en construcción de hospitales (ej. nueva Cárcel Distrital de San Cristóbal – anexa a un complejo hospitalario, y hospitales locales) y dotación tecnológica. Representa aproximadamente 15% de la inversión 2025.
- Integración Social: ~2,5 billones (estimado) – si bien no aparece entre los tres primeros, la inversión social permaneció robusta. Se destinaron recursos para subsidios a 300.000 hogares vulnerables (Ingreso Mínimo Garantizado) y ampliación de cupos en atención a jóvenes y adultos mayores. Integración sigue siendo un sector principal en términos absolutos, con énfasis en programas de reducción de pobreza y equidad de género.
- Hábitat (Vivienda): ~1,7 billones (estimado) – recibió un incremento histórico de +41% frente a 2024, según destacó el Distrito. Esto permitió financiar 24.240 nuevos subsidios de vivienda (18.936 para compra de vivienda nueva, 800 para arrendamiento social y 4.504 para mejoramiento de vivienda), dentro de la estrategia de reactivación económica con enfoque en vivienda. Si bien Hábitat aún es menor que los sectores anteriores en magnitud, en 2025 superó ampliamente su inversión de años previos, ganando un lugar destacado en las prioridades sectoriales de la ciudad.

También es importante señalar la apuesta por Seguridad y Convivencia: aunque este sector no está entre los cinco con mayor dinero total (su presupuesto ronda 1–1,5 billones), tuvo el mayor incremento porcentual (+43%) en 2025. La nueva administración destinó recursos significativos a seguridad ciudadana (videovigilancia, justicia, policía y Bomberos), reflejando una prioridad política del alcalde Galán, si bien en términos absolutos seguridad sigue por debajo de sectores como integración o hábitat.




 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

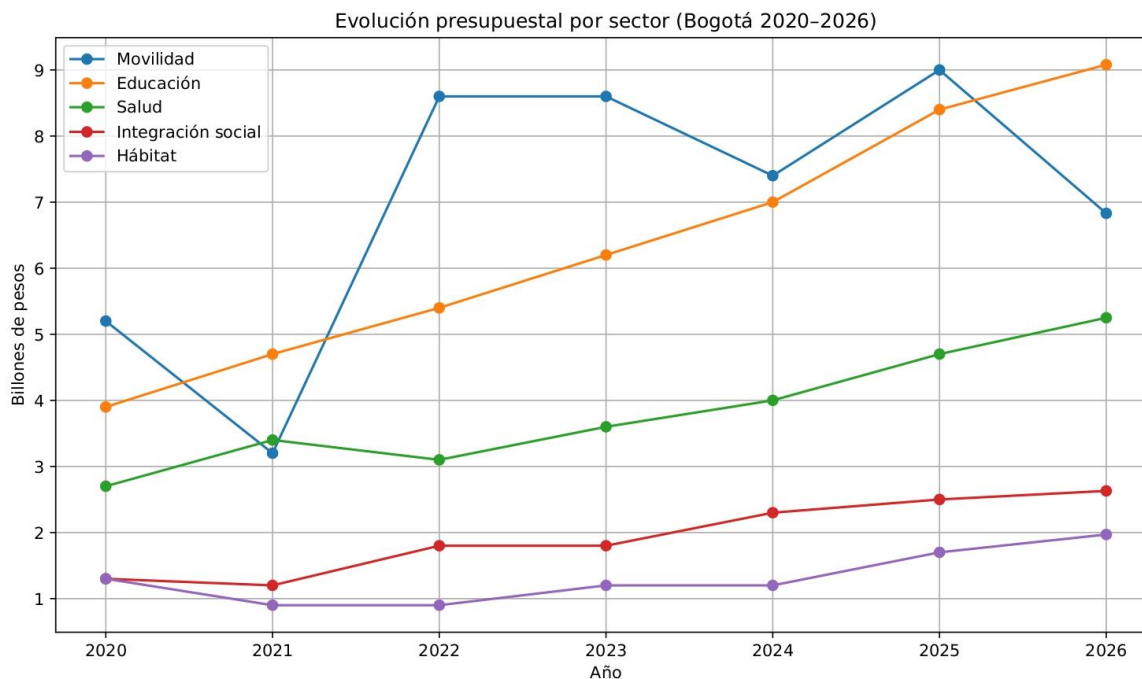
Variaciones interanuales: El salto de 2024 a 2025 implicó reordenamientos clave en el gasto. Movilidad aumentó cerca de 22% (de 7,4 a 9,0 billones) recuperando el liderazgo en valor, para acelerar grandes obras de transporte. Educación subió ~20% (de ~7,0 a 8,4 billones) consolidándose como el mayor gasto social del Distrito. Salud creció ~18% nominal (de ~4,0 a 4,7 billones), manteniendo su proporción en el presupuesto. Por otra parte, se confirma el impulso excepcional a Hábitat, que prácticamente despegó (de ~1,2 a ~1,7 billones, +41%) enfocándose en vivienda popular como motor de reactivación. Integración Social también habría crecido (aprox. 8–10% frente a 2024), aunque moderadamente, pues en años anteriores ya se habían fortalecido sus programas base. En resumen, 2025 inauguró un nuevo plan de desarrollo con tres énfasis transversales: seguridad, reactivación económica y acción climática, sin descuidar el gasto social existente. Esto se reflejó en aumentos extraordinarios para seguridad y vivienda, junto a la continuidad del alto gasto en educación, salud y movilidad.

### Comparación de la evolución sectorial

En términos nominales, el presupuesto de Bogotá tuvo un crecimiento sostenido entre 2020 y 2026, pasando de 21,1 billones a 40,4 billones (casi +92% acumulado). Gran parte de este aumento se concentró en la inversión. La siguiente tabla resume la asignación a los cinco sectores con mayores recursos en cada año, evidenciando sus variaciones interanuales:


Sector / Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (proj.)
<b>Movilidad</b>	\$5,2 B	\$3,2 B	\$8,6 B	\$8,6 B	\$7,4 B	\$9,0 B	\$6,83 B
<b>Educación</b>	\$3,9 B	~\$4,7 B	\$5,4 B	~\$6,2 B	~\$7,0 B	\$8,4 B	\$9,08 B
<b>Salud</b>	\$2,7 B	\$3,4 B	\$3,1 B	~\$3,6 B	~\$4,0 B	\$4,7 B	\$5,25 B
<b>Integración Social</b>	\$1,3 B	\$1,2 B	\$1,8 B	~\$1,8 B	~\$2,3 B	~\$2,5 B	\$2,63 B
<b>Hábitat</b>	\$1,3 B	~\$0,9 B	\$0,9 B	~\$1,2 B	\$1,2 B	~\$1,7 B	\$1,97 B

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019



Claramente, entre 2020 y 2026, lo primero que salta a la vista son movilidad y educación como las curvas más amplias, así, en cuanto a movilidad, se sostiene una permanente inversión billonaria que tiene como objetivo llenar los bolsillos de los operadores privados del SITP que, por vía del FET, subsidian su ganancia independientemente de los resultados, para 2026, estos operadores tendrían ganancias por 356.362 millones con una rentabilidad neta del 4%. Aunque los rubros de educación sostienen el aparataje público de la educación básica y media, no es menor el monto dedicado a Jóvenes a la E, Jóvenes a la U y todos los programas destinados al subsidio a la demanda, recursos que usualmente quedan en las arcas de agentes privados del mercado educativo.

Mientras tanto, los recursos para la gestión de la pobreza en Integración Social y Hábitat también crecen, pero en función de la tercerización y la focalización, por ejemplo, con subsidios que garantizan el negocio inmobiliario, pero que mantienen el sueño de tener casa propia muy lejos de las posibilidades reales de las clases populares en la ciudad. No estamos contemplando un “énfasis en lo social, estamos contemplando un Estado local cuya principal tarea es mantener a Bogotá como una plataforma competitiva para el capital.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

### III. MARCO NORMATIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El marco normativo que rige y sustenta la presentación del Proyecto de Acuerdo sobre el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2026, abarca legislación nacional, estatutos distritales y documentos de planeación estratégica.

El documento central es el Proyecto de Acuerdo que lleva por título: "Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones".

La ejecución de este presupuesto se debe regir por las siguientes normas:

#### 1. Normativa Presupuestal y Financiera Fundamental

**Decreto Distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital):** Este es el estatuto orgánico principal que rige la materia. Establece que el Gobierno Distrital debe someter el Proyecto de Presupuesto Anual a consideración del Concejo Distrital, por conducto de la Secretaría de Hacienda Distrital, durante los primeros tres (3) días de las sesiones ordinarias del mes de noviembre.


Determina que el Proyecto de Presupuesto Anual debe contener el Proyecto de Rentas e Ingresos, de Inversiones y Gastos, el Resultado Fiscal y las disposiciones generales. Asimismo, regula la preparación anual del Proyecto de Presupuesto, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales. Sus artículos 72 y 73 rigen lo relativo al Cupo de Endeudamiento.

**Constitución Política de Colombia:** Artículos 352, 353 y 359.

**Ley 617 de 2000:** Relacionada con los límites de los gastos de funcionamiento, entre otras disposiciones.

**Ley 819 de 2003:** Dispone la presentación anual de un Marco Fiscal de Mediano Plazo para las entidades territoriales, incluidos los Distritos.

**Otras Leyes Nacionales:** La ejecución también se debe alinear con las Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007, 1483 de 2011 y el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

**Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015:** Del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere a las entidades territoriales.

## 2. Marco de Planeación y Austeridad

La asignación de recursos y la ejecución de los gastos se orientan por los siguientes instrumentos de planeación y control:

**Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”:** Este plan fue adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024. La asignación presupuestal prioriza las inversiones orientadas al gasto social y la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo económico, en el marco de las prioridades de este Plan.


**Calidad del Gasto (Acuerdo 927 de 2024, Artículo 267):** Establece el uso obligatorio de herramientas de calidad del gasto público como Productos, Metas y Resultados (PMR), Evaluaciones de Gasto, Marco de Gasto de Mediano Plazo, y Trazadores Presupuestales, con el fin de evaluar la implementación de la calidad del gasto.

**Trazadores Presupuestales (Acuerdo 927 de 2024, Artículo 268):** Dispone que la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) deben definir los trazadores para el seguimiento de políticas transversales (como equidad de género, niñez, juventud, población con discapacidad, construcción de paz, etc.).

**Decreto Distrital 062 de 2024:** Contiene las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público que las entidades regidas por el Acuerdo deben aplicar en la ejecución del presupuesto.

## 3. Normativa Específica (Cupo de Endeudamiento y Presupuestos Participativos)

**Cupo de Endeudamiento:** La ejecución, control y seguimiento de las operaciones de crédito público del Distrito, y el otorgamiento de garantías, deben seguir las reglas contenidas en el Decreto Distrital 192 de 2021, modificado y adicionado por los Decretos Distritales 356 de 2022, 482 de 2023 y 556 de 2023.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

#### **Presupuestos participativos:**

**Acuerdo Distrital 878 de 2023 (Artículo 66):** Contiene los lineamientos sobre la implementación de Presupuestos Participativos en los Planes de Desarrollo de los Fondos de Desarrollo Local.


**Decreto 495 de 2023:** Reglamenta la implementación del artículo 66 del Acuerdo 878 de 2023

**Normativa de Gestión de Riesgos:** Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) y Acuerdo 546 de 2013 (que transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - SDGR-CC).

#### **IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025, mediante el cual la Administración Distrital solicita al Concejo de Bogotá la aprobación del Presupuesto Anual de Rentas, Recursos de Capital y Apropriaciones para la vigencia fiscal 2026, constituye la herramienta fundamental para habilitar jurídicamente el funcionamiento del Distrito y la ejecución de sus políticas públicas. Su presentación se enmarca en las obligaciones definidas en los artículos 352, 353 y 354 de la Constitución Política, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Decreto Ley 1421 de 1993 y las normas que regulan la planeación territorial. No obstante, más allá del cumplimiento estricto de los requerimientos normativos, este proyecto de presupuesto plantea una serie de desafíos estructurales, tensiones institucionales y riesgos de sostenibilidad que deben ser objeto de análisis crítico por parte del Concejo, dado que de su aprobación depende no solo la continuidad operativa de la Administración, sino también la orientación material del desarrollo de la ciudad y la capacidad estatal para responder con oportunidad y eficacia a los problemas públicos de mayor relevancia.

Desde una perspectiva técnico-institucional, el presupuesto de 2026 busca garantizar la consistencia entre lo autorizado por el Concejo y lo exigido por el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Sin embargo, la estructura del proyecto revela una serie de elementos que ameritan un escrutinio detallado. En primer lugar, se observa un incremento significativo en determinados sectores que arrastran compromisos de gran envergadura (particularmente Movilidad, Educación y Salud), mientras que otros presentan reducciones relativas o estancamientos que deben ser contextualizados a la luz de la ejecución real, los cuellos de botella administrativos, la capacidad instalada y el desempeño institucional de los últimos años. Esta asimetría


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

no es en sí misma un error técnico, pero sí exige un análisis cuidadoso que considere la capacidad efectiva de absorción del gasto, el cumplimiento de metas sectoriales y la eficiencia en la gestión.

La formulación del presupuesto se soporta en una estimación de ingresos tributarios y no tributarios cuyo crecimiento proyectado se alinea con las tendencias históricas, pero que no deja de enfrentar riesgos asociados a la desaceleración económica, la volatilidad en el mercado inmobiliario, el comportamiento del empleo formal y las limitaciones históricas del recaudo distrital. Esto implica que el presupuesto descansa en supuestos razonables, pero no necesariamente garantizados, lo cual subraya la importancia del principio de prudencia fiscal. Aunque la Administración presenta cifras consolidadas que sostienen la viabilidad financiera de la propuesta, la magnitud de los compromisos futuros derivados de vigencias futuras y obras estratégicas obliga a considerar que el margen fiscal para atender presiones imprevistas es reducido. Desde un punto de vista estrictamente institucional, esta situación no invalida la propuesta, pero sí requiere que el Concejo ejerza un control riguroso sobre los supuestos que sostienen la proyección de ingresos.

En términos de gasto, el Proyecto de Acuerdo refleja una priorización marcada hacia programas y proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. No obstante, la observación institucional crítica debe identificar el desbalance persistente entre inversión sectorial e inversión local, así como entre gasto en infraestructura física y gasto en provisión de servicios sociales. Una parte considerable del presupuesto se destina a financiar obras de gran escala que dependen del cumplimiento de cronogramas complejos, estructuras contractuales sofisticadas y marcos de gestión de riesgos que históricamente han enfrentado retrasos y sobrecostos. Desde la perspectiva institucional, este tipo de inversiones exige altos niveles de seguimiento, articulación intersectorial y coherencia técnica entre las entidades ejecutoras. La experiencia reciente del Distrito muestra que tales condiciones no siempre se encuentran plenamente garantizadas, lo que representa un riesgo relevante para la ejecución del presupuesto de 2026.

Asimismo, el presupuesto busca sostener programas fundamentales en educación, salud, integración social, seguridad, ambiente y vivienda. La continuidad de estos programas es indispensable para la atención de derechos básicos de la población, pero su sola inclusión presupuestal no resuelve las dificultades estructurales que afectan su ejecución: procesos contractuales que se demoran más de lo previsto, limitaciones de personal en entidades ejecutoras, restricciones en la capacidad operativa a nivel local, debilidades en sistemas de información y rezagos significativos en la formulación técnica de proyectos. Una lectura crítica institucional debe señalar que, aunque el presupuesto asigna recursos considerables

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

a estos sectores, el reto principal no está en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad de gestionarlos de forma oportuna, eficiente y con enfoque territorial.

En este punto surge una tensión especialmente relevante: la relación entre la magnitud de las apropiaciones y la capacidad real de ejecución. Diversos sectores presentan dificultades históricas para ejecutar apropiaciones crecientes, particularmente cuando enfrentan ciclos de contratación complejos o requieren articulación con múltiples entidades del nivel central y local. Desde un enfoque de responsabilidad fiscal, aumentar las apropiaciones sin asegurar previamente la superación de estos cuellos de botella puede resultar en menores niveles de ejecución, rezagos en metas sectoriales e ineficiencias en el uso de los recursos públicos. El Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025 no desconoce esta problemática, pero tampoco la aborda plenamente mediante medidas institucionales correctivas, lo cual invita al Concejo a realizar un seguimiento más estricto sobre la coherencia entre apropiación, capacidad operativa y resultados.

Otro componente crítico es la asignación de recursos a los Fondos de Desarrollo Local. La descentralización presupuestal es un mecanismo valioso para garantizar la pertinencia territorial de la inversión pública, pero su efectividad depende de que las alcaldías locales cuenten con capacidades suficientes para formular proyectos, adelantar procesos contractuales y ejecutar recursos. En los últimos años, múltiples localidades han registrado niveles preocupantes de subejecución, demoras en la formalización de proyectos y dificultades en la articulación entre lo local y lo central. Así, aunque el proyecto incorpora montos significativos para los FDL, una lectura crítica institucional debe advertir que la sola asignación de recursos no garantiza la efectiva materialización de los proyectos de impacto local. Es necesario fortalecer la gestión local, mejorar los sistemas de apoyo técnico desde las entidades del nivel central y establecer mecanismos de control que permitan asegurar que los recursos asignados se traduzcan en mejoras tangibles para la ciudadanía.

La inclusión de recursos para el pago del servicio de la deuda constituye otro factor que requiere análisis crítico. Si bien el endeudamiento es un instrumento válido para financiar proyectos de largo plazo, su utilización intensiva reduce el margen de maniobra de la Administración en vigencias futuras. El proyecto reconoce esta responsabilidad, pero la dimensión de los compromisos adquiridos para la financiación de obras estratégicas implica que una parte considerable del presupuesto de 2026 y de los años siguientes estará destinada al cumplimiento de estas obligaciones. Desde una perspectiva institucional, el endeudamiento debe evaluarse no solo por su legalidad y sostenibilidad financiera inmediata, sino también por su impacto sobre la capacidad del Distrito para responder a necesidades sociales emergentes, adaptarse a cambios económicos y priorizar inversiones en territorios históricamente rezagados.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


En relación con la estrategia de seguimiento, el presupuesto incorpora trazadores presupuestales, sistemas de control interno y mecanismos de reporte sectorial. Estos instrumentos son valiosos para monitorear el uso de los recursos y evaluar el cumplimiento de metas, pero su efectividad depende de la calidad de los datos, la articulación con sistemas externos (como SUIFP, SIE-Local y SUIFP Territorial) y la capacidad institucional para interpretar y actuar sobre la información. Como lo demuestra la experiencia en años recientes, la existencia de trazadores y sistemas de información no garantiza por sí sola una ejecución más eficiente ni un impacto real en el desarrollo territorial; estos instrumentos requieren fortalecimiento técnico permanente, interoperabilidad y mayor inversión en analítica de datos, aspectos que no siempre se reflejan con claridad en el presupuesto de 2026.

Finalmente, el proceso de aprobación del presupuesto ante el Concejo es un ejercicio necesario de escrutinio democrático. No obstante, una lectura crítica institucional debe subrayar que la magnitud y complejidad del proyecto –sumado al número limitado de días disponibles para el análisis detallado en comisiones y plenaria– limita la profundidad del debate público y dificulta la evaluación integral de todos sus componentes. La discusión presupuestal requiere mayor transparencia en la presentación de información, más tiempo para la revisión sectorial y mecanismos adicionales de participación ciudadana que permitan comprender plenamente las implicaciones distributivas y territoriales del presupuesto.

En síntesis, aunque el Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025 cumple con los requisitos normativos para ordenar el gasto e inversión del Distrito Capital en 2026 y refleja las metas del Plan Distrital de Desarrollo, una mirada crítica e institucionalmente responsable evidencia tensiones importantes entre la magnitud de las apropiaciones y la capacidad real de ejecución, entre la apuesta por grandes proyectos de infraestructura y la necesidad de fortalecer programas sociales y territoriales, entre el crecimiento de obligaciones multianuales y la sostenibilidad fiscal a futuro, así como entre la sofisticación de los instrumentos de seguimiento y la capacidad institucional para aplicarlos efectivamente. La aprobación del presupuesto requiere, por tanto, un análisis detallado por parte del Concejo de Bogotá que tome en cuenta no solo la legalidad y coherencia formal del proyecto, sino también la pertinencia de sus orientaciones estratégicas y los riesgos institucionales asociados a su ejecución.

## **V. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Para iniciar la presentación de este presupuesto, es necesario señalar desde el principio que nuestra ponencia será negativa. No porque desconocemos la importancia del presupuesto para el cumplimiento de los fines sociales del Estado, sino porque este proyecto


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

refleja de manera evidente la priorización y el favorecimiento de un modelo de ciudad neo-liberal al que siempre nos hemos opuesto. Más allá de manifestar nuestro rechazo, queremos demostrar cómo este presupuesto se convierte en una muestra clara de beneficio a determinados sectores económicos, por encima de las necesidades reales de la ciudad. A nuestro juicio, si de verdad se quisiera garantizar una ciudad de derechos para sus habitantes, los recursos no deberían priorizarse para obras de infraestructura o para sostener un sistema de transporte ineficiente que termina acumulando grandes ganancias en manos privadas. Por el contrario, debería existir un enfoque que realmente impacte las condiciones socioeconómicas de la población y responda a las urgencias sociales que hoy siguen sin ser atendidas.

Por ende, demostraremos cómo este presupuesto no garantiza las necesidades sociales de la población más vulnerable; por el contrario, traslada sobre ella mayores cargas fiscales y profundiza la desmejora en los servicios destinados a mejorar sus condiciones de vida. Esta situación se evidencia en la ineficiente ejecución presupuestal registrada durante el 2024 y en lo que va del 2025, lo cual confirma que, además de insuficiente, este presupuesto no responde de manera efectiva a las realidades sociales que exige atender.

En primera medida, nos parece preocupante como se evidencia una disminución en la proyección inicial del recaudo del ICA, pues se tenía presupuestado recaudar \$7,6 billones, de los cuales se dejarán de recaudar aproximadamente \$387.662 millones, a pesar de que la Secretaría de Hacienda menciona que esto se debe a las dinámicas de las entidades financieras, cuyos ingresos fueron menores a los del año 2024 a causa de la disminución de las tasas de intereses y el bajo crecimiento en la cartera crediticia, lo que observamos es que la disminución de aportantes al ICA es la principal causa de este bajo recaudo. Esto demuestra que el panorama económico de las MiPymes en Bogotá es poco favorable: el crecimiento en el número de empresas vigentes no se traduce en un aumento proporcional del recaudo, lo cual puede reflejar tanto la incapacidad de muchas unidades productivas para alcanzar estabilidad y generar ingresos suficientes, como la persistencia de prácticas de evasión asociadas a la presión fiscal que enfrentan y que esta administración pretende profundizar.

Para 2024, Bogotá contaba con 441.066 empresas vigentes, de las cuales 437.849 (99,2 %) correspondían a micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, una parte significativa de ellas enfrenta dificultades para formalizarse y aportar de manera efectiva a los tributos distritales. Prueba de ello es que, según información de la Secretaría de Hacienda, en 2025 solo 136.440 personas jurídicas aportaron al ICA, cifra inferior a la registrada en 2024 (145.143) e incluso menor que la de 2022, cuando se estaba saliendo de la crisis de la pandemia (140.854).


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Con relación a la proyección incluida en este presupuesto sobre el aumento del recaudo a través del impuesto de vehículos, esta administración señala que se buscará “incentivar” el registro de matrículas en Bogotá mediante diversas medidas. Al preguntar en qué consistían dichos “incentivos”, la Secretaría indicó que la primera medida (ya anunciada) será la implementación del pico y placa los sábados para los vehículos matriculados por fuera de la ciudad. La segunda medida consiste en aumentar el factor municipal dentro del pico y placa solidario, pasando de 1,2 a 1,5, lo que generará un mayor costo para los vehículos registrados fuera de Bogotá.

Más que un incentivo, esta medida parece funcionar como una forma de disuasión tanto para la matriculación de vehículos en Bogotá como para el pago del pico y placa solidario. Esto ocurre en un contexto en el que los ciudadanos ya enfrentan fuertes restricciones de circulación derivadas de las múltiples obras inconclusas en la ciudad, y ahora se propone una carga adicional en lugar de asumir un compromiso real con la finalización de dichas obras, que afectan gravemente la movilidad. La principal razón por la cual muchos contribuyentes matriculan sus vehículos fuera de Bogotá es el alto costo del impuesto vehicular, que ha sido utilizado por las administraciones neoliberales de turno como una fuente de ingresos para sostener y beneficiar al oligopolio privado del transporte. Un ejemplo de ello es la implementación de los 0,2 puntos porcentuales adicionales en el impuesto de vehículos, contemplados en la Ley 2199 de 2022 y materializados en este Plan de Desarrollo Distrital (PDD) para ser cedidos a la Agencia Regional de Movilidad de la Región Metropolitana.

Por otro lado, hemos manifestado de manera reiterada nuestra oposición a los grandes cupos de endeudamiento presentados por las últimas dos administraciones distritales. Estos endeudamientos, en su mayoría, se terminan destinando a la construcción de infraestructura de movilidad y a grandes proyectos urbanos, mientras que la inversión en política social resulta insignificante en comparación. Por ende, sí se evidencia un aumento desproporcionado en el presupuesto asociado al servicio de la deuda, es decir, al dinero que debe pagarse año a año para cubrir los créditos adquiridos, lo cual limita aún más la capacidad del Distrito para priorizar la atención social.

A septiembre de 2025, el Distrito registra un saldo de deuda de \$11,84 billones. Para el año 2026, se proyecta destinar el 6,3% del presupuesto total al pago de esta obligación, equivalente a \$2,6 billones, lo que representa un aumento del 27,7% respecto a lo asignado en 2025. Aunque en 2025 la inversión presentó un crecimiento del 18,7%, para 2026 el incremento proyectado es de apenas el 3,2%. Esto evidencia una clara reducción en la destinación de recursos para inversión social y de ciudad, al tiempo que aumentan los montos

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

dirigidos al pago de deuda, profundizando así un modelo presupuestal regresivo que limita la capacidad del Distrito para responder a las necesidades de la población.


A corte de septiembre de 2025, Bogotá mantiene 47 créditos vigentes, de los cuales 16 corresponden a deuda externa y 31 a deuda interna. En el caso de la deuda externa, los mayores pagos de intereses financieros durante 2025 se concentran en algunos acreedores principales como la Agencia Francesa de Desarrollo, BBVA España y la Corporación Financiera Internacional. Por otra parte, en la deuda interna los mayores pagos de intereses corresponden a Bancolombia, el Bancoldex, Banco de Bogotá y BBVA. Según las proyecciones oficiales entregadas por la Secretaría de Hacienda, entre 2026 y 2036 Bogotá tendrá que pagar cerca de \$18 billones sólo en intereses, aparte de la amortización a capital.

Además, la ciudad se ha comprometido con un servicio de la deuda que supera los \$4 billones anuales a partir de 2033 para cumplir con el pago de la deuda total a 2036 como se tiene proyectado. A esto se suma otro hecho preocupante, en tan solo seis años (2020–2026), el saldo de la deuda ha aumentado en cerca de \$15,5 billones. Ni siquiera durante los años más críticos de la pandemia se registró una expansión tan abrupta del endeudamiento. Este comportamiento de la deuda es lo que ha dejado a 2025 la ciudad se encuentre en un déficit fiscal. Lo anterior genera una rigidez presupuestal extrema, ya que cada año una porción mayor del presupuesto debe ir directamente a los acreedores, reduciendo la capacidad del Distrito para financiar iniciativas de alto impacto social.

Por otro lado, a lo largo de nuestros debates hemos señalado cómo el neoliberalismo se ha impuesto en nuestro país bajo la idea de que la eficacia económica depende de romper los límites estatales para dar paso a una “integración de la sociedad global dirigida por el mercado”. En la práctica, este discurso ha promovido la desestabilización y el deterioro de lo público con el fin de justificar procesos de privatización, que terminan concentrando grandes ganancias en manos de operadores privados sin que ello se traduzca en mejoras reales en la prestación de los servicios.

En consecuencia, hemos sido enfáticos en la necesidad de privilegiar lo público por encima de lo privado. Como lo hemos demostrado, la gestión pública suele ser más eficiente y menos costosa, pues no destina recursos para cubrir las utilidades de actores privados; por el contrario, permite que dichos recursos se reinviertan en ampliar la cobertura, mejorar la calidad y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios dignos y accesibles para la ciudadanía.

Más allá del discurso, esto puede evidenciarse directamente en la estructura del presupuesto. Según la exposición de motivos, las empresas industriales y comerciales del Estado

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

(que también hacen parte del presupuesto de Bogotá), entre ellas Aguas de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la Operadora Distrital de Transporte, La Rolita, entre otras, generan de manera autónoma ingresos por alrededor de \$32,099 billones. De este total, cerca de \$27,8 billones se destinan a gastos, lo que deja una disponibilidad final de \$4,2 billones.

La participación de estas empresas en el presupuesto general corresponde al 42,62%, y adicionalmente aportan a la ciudad, a través de dividendos y excedentes, ingresos equivalentes aproximadamente al 7% del presupuesto total. Estos resultados demuestran que el fortalecimiento de lo público no sólo es coherente con nuestros principios políticos, sino que también es fiscalmente conveniente y sostenible.


Estas empresas recaudan casi el mismo porcentaje de la Administración Central que cuenta con una participación del 47,7% dentro del presupuesto. En otras palabras, ¿Qué implicaría, entonces, que la prioridad del Distrito fuera fortalecer estas empresas en lugar de avanzar, una y otra vez, en su privatización? Implicaría que la prestación de los servicios sería más eficiente, más económica y, además, generaría mayores retornos para la ciudad.

Una vez hecha esta claridad, pasamos a exponer las razones por las cuales, sector por sector, consideramos que este presupuesto no está orientado a mejorar las condiciones de vida de la población. Por el contrario, reafirma un modelo de ciudad que prioriza las ganancias privadas por encima de las necesidades reales de sus habitantes.

## **Sector Movilidad**

En el caso del sector Movilidad, el presupuesto de inversión previsto para 2026 es de \$8.7 billones, incluyendo el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que tiene proyectado un valor de \$3.2 billones, sin incluir subsidios. Es decir, el FET representa el 37% de la inversión del sector, siendo de lejos, unitariamente, el concepto con más recursos programados dentro de la inversión que tiene prevista para el próximo año. Donde se pone la mayoría del dinero es donde se encuentra el centro de la política y, en ese sentido, la prioridad de la inversión en movilidad es la de mantener el negocio privado del transporte público en buses de Bogotá.

Por su parte, el FET tiene un aumento del 6,6% para 2026, en relación al valor que tuvo en 2025 (\$3 billones), y de 2,1% en términos reales si se tiene en cuenta que la inflación tomada como base es de 4,52. Es decir, tiene un aumento de alrededor de \$200.000 millones en total, y de casi \$65.000 millones en términos reales si se descuenta la inflación. Si hu-

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

biese una política que hiciera primar el interés general sobre el interés particular, ese aumento real del FET podría cargarse a los concesionarios privados racionalizando sus rentabilidades y utilidades, teniendo como consecuencia la congelación del FET y la liberación de ese recurso público en favor de Bogotá.

Acorde con los Estados Financieros correspondientes al año 2024 (pues los de 2025 aún no han salido), los concesionarios privados de las Fases III, IV y V del SITP, que son las que están activas, en conjunto con la empresa Recaudo Bogotá, reportaron ingresos operacionales por \$5 billones, una utilidad operacional de \$1 billón, una utilidad neta de \$216.682 millones y una rentabilidad neta del 4%. Si se pone el foco en las actividades y Fases más rentables, resulta que los privados de la Fase IV tuvieron una utilidad neta de \$156.630 millones con una rentabilidad neta del 13%, y Recaudo Bogotá tuvo una utilidad neta de \$22.393 millones con una rentabilidad neta del 10%. Es decir, es perfectamente razonable, en función del interés público, no permitir en la Fase IV ni a Recaudo Bogotá una rentabilidad neta superior al 4%.

Si así se hubiera hecho, para 2024 se hubieran evitado \$121.872 millones de déficit cargados al FET. Con ese dinero se hubieran cubierto los \$77.997 millones que se invirtieron en subsidios (SISBEN, discapacidad y adulto mayor), con los que se beneficiaron 1.202.221 personas, e igualmente hubiera alcanzado para costear casi todos los \$46.908 millones invertidos por el Distrito en 2024 en estrategias anti-evasión. Para 2026, se tiene calculado un monto de \$55.087 millones para subsidios (Secretaría de Integración Social) y de \$74.070 millones para estrategias anti-evasión. Una de las propuestas que hicimos desde el debate de control político que realizamos sobre este tema el pasado 29 de octubre, es que este monto de \$129.157 millones pueda ser asumido por los privados, y en todo caso mantener lo actualmente programado en subsidios para 2026 desde la Secretaría de Integración Social, lo que duplicaría su alcance en población beneficiada.

Ambas alternativas en favor del Distrito y/o los usuarios: congelar el FET o pagar subsidios (duplicándolos) y estrategias anti-evasión racionalizando rentabilidades y utilidades de los privados, perfectamente posibles si se tiene en cuenta que para 2026 los ingresos operacionales (Troncal, Zonal y Recaudo) se tienen calculados en \$6.4 billones con lo que, si tenemos presente solamente el dato general de 2024 de rentabilidad neta del 4%, pues no tenemos los datos disgregados por Fases y actividades en 2026 para hacer un ejercicio más detallado, los concesionarios privados tendrán una utilidad neta de \$257.740 millones. Insistimos en que garantizar el transporte como derecho es más efectivo como estrategia anti-evasión que cualquier torniquete piso-techo. Esa es la política que nosotros hemos propuesto desde la oposición, pero que la Administración de Carlos Fernando Galán no comparte y niega. Así, desde que siga primando el negocio de unos pocos, el oligopolio



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

privado que es la verdadera junta directiva del SITP, por encima del bienestar colectivo, no daremos aval al presupuesto. Aquí todos ponemos: el Distrito con el FET y el usuario pagando un pasaje más costoso; pero los privados mantienen intacto su negocio subsidiado por el Estado.

Además porque lo que no dice la Alcaldía es que, con ese monto del FET de 2026 en \$3.2 billones, será necesario un aumento en el pasaje de \$250 pesos; es decir, pasará de \$3.200 a \$3.450. Este aumento del 7,8% resulta 3,2 puntos por encima del IPC (4,52), lo cual es más perjudicial para los estratos 1, 2 y 3 que viven en la informalidad laboral, son a los que más les pesa sobre sus ingresos el gasto en transporte y son los que más utilizan el SITP. Transmilenio, en el estudio que realiza anualmente sobre las proyecciones del FET, sugirió un aumento del pasaje de \$150 (4,6%), es decir, congelar el pasaje en términos reales pues estaría casi apegado al IPC. Con la sugerencia de Transmilenio el FET quedaría en \$3.3 billones, con una diferencia de \$98.622 millones con respecto al incluido en el presupuesto (\$3.2 billones) para el aumento de \$250.

Si la política del Distrito fuera hacer prevalecer el interés colectivo y de los más pobres por encima del interés de unos cuantos empresarios privados, podría congelar el costo del pasaje en términos reales quedando en \$3.350 en 2026, es decir, aumentando solamente el IPC, y cargar los \$98.622 millones a las utilidades y rentabilidad de los concesionarios, sin que dejen de ganar, pero también asumiendo el déficit por parte de ellos para que todos pongamos. Pero no, la política es aumentar el FET en 6,6% y el pasaje en 7,8%, dejando intactas las ganancias privadas. Por supuesto que semejante mala decisión, en contra de los pobres de la ciudad, no la acompañamos y esta es una de las razones por las que nuestra ponencia es negativa.

## **Infraestructura**

En línea con esta apuesta por la infraestructura vial, el presupuesto para 2026 concentra sus principales inversiones en intervenciones para la mejora de la infraestructura del Sistema de Transporte Público (SITP), seguridad vial, espacio público y mantenimiento de la malla vial. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) destinará \$536.708 millones a la Unidad Ejecutora 02 de dirección de tránsito y transporte, orientada a proyectos misionales que inciden directamente en la movilidad segura e inclusiva. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contará con una asignación de \$2,3 billones para la consolidación de las grandes vías troncales y arteriales de la ciudad, mientras que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) invertirá \$171.634 millones en tareas de conservación de la infraestructura vial existente.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


Por parte del IDU, se proyecta la ejecución de nuevas intervenciones viales, así como la ampliación de la infraestructura peatonal y de ciclorrutas, mientras se mantienen las grandes obras que buscan fortalecer el SITP. Sin embargo, este énfasis desconoce que la ciudad atraviesa uno de los momentos más críticos de congestión, producto de la acumulación de obras simultáneas, retrasos y constantes cierres viales.

Actualmente, Bogotá registra cerca de 1.200 frentes de obra activos entre el IDU, la Empresa de Acueducto, los Fondos de Desarrollo Local y las unidades de mantenimiento e integración, de los cuales alrededor de 500 corresponden al IDU. Lejos de evidenciar un compromiso efectivo con la solución de la crisis de movilidad o con la mejora de las condiciones de desplazamiento, la proyección de más frentes parece privilegiar la apertura de nuevos contratos y la expansión del mapa de obras, aun cuando los proyectos en curso avanzan por debajo de lo esperado.

La mayor parte de los recursos destinados a estas obras se orienta a mejorar la infraestructura asociada al transporte público. Esto contrasta con la realidad de Bogotá, donde cerca del 50% de la malla vial (incluyendo vías principales, intermedias y locales) se encuentra en mal estado, afectando directamente la calidad de vida de la ciudadanía. Aunque cada administración promete invertir en su recuperación, en la práctica esta no se convierte en una verdadera prioridad presupuestal. Prueba de ello es que en numerosos barrios vulnerables las vías presentan condiciones críticas, dificultando la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores, el tránsito de ambulancias, del transporte público y, en general, de los habitantes que dependen de estas rutas para su vida cotidiana.

Por ello, una de las principales apuestas de la administración es culminar la construcción de las troncales de TransMilenio, consideradas estratégicas para la integración con el Metro. Sin embargo, la meta de operación para 2026 se limita a 6,26 kilómetros correspondientes a los tramos de la Av. Ciudad de Cali y la Av. Carrera 68, justamente en las zonas más congestionadas de la ciudad y donde ya se evidencian retrasos, sobrecostos e incertidumbre en los cronogramas de entrega. Pese a esto, estas obras continúan siendo la prioridad presupuestal, privilegiando la rentabilidad de los concesionarios privados del sistema de transporte, mientras que las mallas viales locales permanecen relegadas y acumulando décadas de espera en los barrios.

A esto se suma que estas entidades del sector de movilidad también han decidido priorizar proyectos que ponen en riesgo la Estructura Ecológica Principal. Entre ellos destaca la ALO Norte, cuya gestión de predios avanza en función de la estructuración de la malla vial. Este proyecto representa una amenaza ambiental al atravesar ecosistemas sensibles y sistemas

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


hídricos, frente a los cuales la administración no ha logrado demostrar medidas de mitigación efectivas que eviten la fragmentación ecosistémica y el daño ambiental asociado.

En la misma vía evidenciamos como incluso se disminuyen recursos en programas importantes que no necesariamente van ligados a mejorar la infraestructura del transporte público en la ciudad, (con el fin de mejorar las ganancias privadas de los concesionarios) por ejemplo, en la SDM se identifican reducciones significativas en varios proyectos estratégicos de seguridad vial y cultura ciudadana. Uno de los recortes más representativos se encuentra en el proyecto *“Implementación de intervenciones integrales de cultura, comunicación y pedagogía, para la movilidad segura en Bogotá D.C”*, que disminuye -16,12%, pasando de \$10.256 millones a \$8.602 millones. Esta reducción podría limitar la continuidad de campañas pedagógicas y procesos comunitarios que han sido claves para disminuir conductas de riesgo en las vías.

De manera similar, el proyecto de *“Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C”*, que registra una disminución de -13,21%, pasando de \$203.627 millones a \$176.720 millones, reduciendo los recursos disponibles para intervenciones integrales en puntos críticos de siniestralidad. Estas acciones suelen incluir presencia pedagógica en vía, mediación con actores viales y acompañamiento a zonas escolares, por lo que su debilitamiento puede tener efectos en la prevención de siniestros y que las cifras relacionadas a esto siguen sin mejorar en la ciudad. Mientras esta administración considera que implementar políticas restrictivas de parrilleros en moto, son más efectivas que asignar recursos suficientes para estos programas, en el 2024 se registraron 12.940 siniestros viales graves.

Asimismo, en el proyecto *“Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C”*, con una reducción del -11,27%, pasando de \$5.094 millones a \$4.520 millones, se limita la capacidad del Distrito para involucrar a todos los actores viales en procesos de corresponsabilidad, un componente clave para enfrentar el aumento de víctimas en la vía.

En conclusión, estos recortes afectan principalmente los procesos de cambio cultural y gobernanza que complementan las obras físicas. Es decir, un modelo que construye vías, pero descuida a las personas que las transitan. En un contexto de aumento de víctimas estos recortes no solo son contradictorios, sino que pueden terminar costando a la ciudad avances logrados en seguridad vial.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Por otro lado, si bien el presupuesto muestra una priorización clara en el papel, los resultados de ejecución durante la administración revelan lo contrario: los recursos asignados no se están traduciendo en avances reales. Es importante señalar que los porcentajes citados corresponden únicamente a la línea de inversión directa, es decir, a los recursos orientados a la ejecución efectiva de proyectos y no a compromisos administrativos.


En el caso de la Secretaría Distrital de Movilidad, los resultados del PDD “*Bogotá Camina Segura*” evidencian un desempeño muy por debajo de lo esperado. En 2024 la ejecución alcanzó apenas el 34,43%, y para septiembre de 2025 asciende solo a 32,15%, cuando a esa altura del año lo deseable sería estar entre el 70% y el 75%. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) refleja una situación similar: pese al tamaño de su presupuesto, la ejecución de 2024 fue de apenas 25,15%, y al corte de septiembre de 2025 solo llega a 33,13%, muy lejos del estándar aproximado del 75% esperado para proyectos de obra pública a tres meses del cierre fiscal.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) muestra un comportamiento relativamente mejor: aunque en 2024 inició con una ejecución del 23,71%, para septiembre de 2025 alcanza el 48,84%, siendo la entidad del sector con el desempeño más alto. No obstante, este nivel sigue siendo insuficiente para garantizar la recuperación de la malla vial local, una de las principales demandas ciudadanas y una de las mayores problemáticas que se presentan actualmente en la ciudad.

## **Sector Integración Social**

Como lo hemos señalado, las políticas implementadas por esta administración no cumplen con el compromiso de combatir la pobreza en Bogotá. Más que reducirla, se han limitado a mantener controlados los indicadores, mientras en el fondo se priorizan sectores como la construcción y la movilidad, que (como ya lo hemos demostrado) concentran grandes ganancias sin que la calidad, dignidad y seguridad de sus servicios correspondan a las necesidades, ni satisfagan la demanda real de la ciudad. En este contexto, analizaremos cómo el sector de Integración Social, encargado de gestionar gran parte de las acciones dirigidas a la población en situación de pobreza, no está generando un impacto significativo en la mejora de sus condiciones de vida. Por el contrario, bajo la excusa de la austeridad del gasto, se hace aún más evidente que esta administración no prioriza el bienestar de las poblaciones más vulnerables.

En cuanto a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), es importante señalar que, aunque es la entidad directamente encargada del manejo de la pobreza en la ciudad y será

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


la cuarta con mayor presupuesto asignado (con una destinación de \$2,5 billones entre funcionamiento e inversión y un aumento del 6,4 % respecto al año anterior, \$2,3 billones), al revisar en detalle la distribución de estos recursos por programas y proyectos encontramos un panorama preocupante. Aquellos que están orientados a atender de manera directa la situación de pobreza en Bogotá son precisamente los que presentan mayores reducciones presupuestales frente al año anterior. En contraste, los programas de inversión relacionados con el “fortalecimiento institucional”, son los que reciben más recursos a pesar de los lineamientos de la entidad que van en contravía del supuesto fortalecimiento. Como resultado, aunque el presupuesto total de la Secretaría aumenta en términos generales, este crecimiento no se traduce en una mejora real de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables.

Por ejemplo, el programa de Implementación de transferencias monetarias para hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad presenta una disminución presupuestal del -9,4 % para 2026, pasando de \$681.493 millones a \$617.829 millones. Aunque esta administración ha insistido en que su principal apuesta sería el fortalecimiento de las transferencias monetarias, a través del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), para también atender a las personas excluidas de los programas del Gobierno Nacional, la reducción presupuestal evidencia lo contrario.

Según la SDIS, la disminución responde a que esperan seguir “perfeccionando” los métodos de clasificación (exclusión) de beneficiarios; sin embargo, en la práctica esto se traduce en la exclusión de personas vulnerables debido a cambios en los criterios de focalización, más no en que las familias realmente hayan superado su situación de pobreza o vulnerabilidad, como ya pasó durante todo el año 2025.

Desde septiembre de 2024, la SDIS comenzó a aplicar ajustes al IMG y, a partir de 2025, las transferencias monetarias fueron dirigidas exclusivamente a personas en situación de pobreza extrema, personas mayores y personas con discapacidad. En este nuevo esquema, las personas en situación de pobreza moderada (categoría B del Sisbén) quedaron excluidas por simples ajustes en la focalización, y no porque sus condiciones de vulnerabilidad hayan mejorado.

Dentro de este programa, como recordarán, se implementó el llamado “gasto en ciudad”, que en materia de movilidad dejó de consistir en descuentos para que las personas vulnerables pudieran acceder al SITP. Ahora, este componente se traduce en la entrega de un subsidio de transporte mediante pasajes gratuitos. Lo llamativo es que, a diferencia de otros componentes del IMG, para este no se excluye a las personas en pobreza moderada. Todo apunta a que una parte importante de los recursos del programa se dirige directamente a

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


los operadores privados de Transmilenio. Para 2025, el contrato con Transmilenio asciende aproximadamente a \$85.740 millones, recursos destinados a financiar estos pasajes gratuitos y, en consecuencia, a sostener el modelo de negocio del actual oligopolio privado del transporte, además de los montos ya asignados a través del FET, que para 2025 alcanzan los \$3,2 billones.

Más allá de la priorización de recursos para TransMilenio, el problema radica también en que el número de viajes gratuitos entregados mensualmente es limitado, lo cual resulta insuficiente frente a las necesidades reales de movilidad de la población. Para 2026, la reducción de recursos del programa IMG probablemente se traducirá en menos transferencias monetarias para los hogares, pero no en la disminución de los contratos con Transmilenio; se seguirán implementando las focalizaciones que, bajo el discurso de “racionalizar el gasto”, terminan afectando únicamente a la población vulnerable. En la práctica, las utilidades del sector privado permanecen intocables.

En la misma línea, encontramos que proyectos como la implementación de estrategias de inclusión social y productiva para la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad presentan una disminución general del -8,89 %, pasando de \$17.308 millones a \$15.769 millones. Según la Secretaría, esta reducción obedece a que, dentro de las metas del cuatrienio establecidas en el PDD, se definió impactar a un número determinado de jóvenes en total, distribuyendo para cada año una submeta de atenciones que permita cumplir el objetivo global al final del periodo.

No obstante, para la actividad 1 del proyecto (que contempla beneficiar a 40.000 jóvenes durante los cuatro años mediante una ruta de inclusión social y productiva con enfoque diferencial y de género), los avances están lejos de lo esperado. En 2024 se atendieron apenas 2.057 jóvenes; a corte de septiembre de 2025, el avance físico era de 8.161 jóvenes, y la proyección para finales de 2025 es llegar a 11.009. Aun así, la meta para 2026 es atender a 12.000 jóvenes, es decir más personas, pero con un presupuesto menor, pues para esta actividad en particular se registra una disminución del -13,6%, quedando con una asignación de apenas \$5.709 millones, lo que pone en duda la capacidad real de cumplir las metas propuestas en relación con la poca asignación.

Para la actividad 2, se tiene contemplado atender a 40.000 jóvenes para la promoción del acceso a oportunidades y la participación en servicios sociales. A septiembre de 2025, el avance físico era de 9.181 jóvenes atendidos, y la proyección para finales de ese año es llegar a 10.000. Sin embargo, aunque la meta para 2026 es atender a 12.286 jóvenes, nuevamente se asigna a esta meta un presupuesto menor. Para esta actividad se registra una

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

disminución del -7,79%, quedando con un total asignado de \$5.111 millones, lo que evidencia una contracción presupuestal que contradice las metas crecientes de atención por año.

En conclusión, para 2026 se proyecta un acumulado de aproximadamente 23.000 jóvenes atendidos en la actividad 1 y cerca de 22.000 en la actividad 2. Sin embargo, las metas anuales de atención siguen aumentando mientras el presupuesto destinado a estos proyectos disminuye. Bajo estas condiciones, resulta previsible que en 2027 sea difícil alcanzar la meta global de 40.000 jóvenes atendidos si persisten los recortes presupuestales para este tipo de programas. Esto evidencia que, en efecto, a esta administración no le interesa mejorar las condiciones de vida de la juventud vulnerable en Bogotá, sino justificar su gestión con cifras y metas que serán inalcanzables si no se prioriza adecuadamente el presupuesto. Asimismo, encontramos una disminución representativa en uno de los programas orientados a mejorar o ampliar la infraestructura de los servicios sociales en la ciudad. El programa Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales presenta una reducción del -11,93%, pasando de \$69.763 millones a \$61.442 millones. Según la Secretaría, esta disminución se debe a que no existen obras de infraestructura proyectadas para esta vigencia ni pendientes por finalizar, dado que durante 2025 se entregaron varias, como el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes en Suba y La Casona de la Candelaria.

Lo llamativo es que, para 2026, en la actividad 2 que consiste en adelantar el 100% de las etapas requeridas para ampliar la infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales con estándares de calidad, el anteproyecto presentado por la entidad reconoce que, debido a la baja asignación de recursos y al tiempo requerido para la adecuada ejecución de dos obras nuevas, no será posible cumplir con la meta en los plazos establecidos.

En esta actividad, además, se proyecta una disminución presupuestal del -66,18%, pasando de \$18.299 millones a apenas \$6.189 millones. Esta reducción obedece principalmente a que no se llevará a cabo la apertura del Centro Social de Vivienda Transitoria Unidad-Habitacional ni la construcción del nuevo Centro Sociosanitario de Bosa.

En conclusión, la prioridad de esta administración no está orientada a ampliar la infraestructura de los servicios sociales ni a garantizar la entrega efectiva de las obras ya iniciadas, debido al recorte presupuestal proyectado. Mientras la asignación para el Metro avanza con mayor solidez y cuenta con una financiación amplia y estable, los recursos destinados a los servicios sociales quedan relegados a un segundo plano.

El programa de Bienestar alimentario y nutricional, cuyo fin es brindar servicios de alimentación principalmente a través de los comedores comunitarios, tuvo apenas un aumento mínimo del 0,25%, pasando de \$255.207 millones a \$255.854 millones. En la actividad 1,



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

que establece atender a 81.800 personas en comedores comunitarios como parte del programa *Erradicación del Hambre 2.0*, se observa un incremento del 36% para 2026, con una destinación de \$143.374 millones. Sin embargo, según el anteproyecto de la Secretaría, este aumento responde principalmente a ajustes legales y operativos obligatorios: incrementos salariales del talento humano contratado, actualización por inflación de los contratos y costos asociados a los equipos de supervisión.

Es decir, este incremento no contempla la apertura de los 19 nuevos comedores comunitarios que se proyectaban para 2026, con los cuales se esperaba llegar a 158 comedores al final de ese año. Por el contrario, la Secretaría aclara que estos recursos representan apenas el mínimo necesario para garantizar la operación de los 135 comedores actuales, sumando los incrementos de ley que dicha operación implica.

Por ende, la apertura de los 19 comedores proyectados para 2026 dependerá de la articulación con otras entidades distritales que incorporen esta expansión dentro de sus metas o, en su defecto, de recursos que se asignen de la vigencia 2027, según lo señalado por la Secretaría. En conclusión, el presupuesto aprobado no ofrece ninguna garantía para la ampliación de los comedores comunitarios correspondientes a 2026. Además, el aumento de apenas 0,25% en el proyecto general (que incluye diversas actividades, entre ellas la atención en los comedores) evidencia que a esta administración no le interesa garantizar una prestación óptima de los servicios, una atención digna para la población vulnerable ni la ampliación efectiva de la cobertura. Por el contrario, se limita a plantear metas que ni siquiera sabe cómo cumplirá, sin asegurar un impacto real en la cantidad de personas beneficiadas por estos servicios esenciales.

Por otro lado, en la actividad 2, que consiste en entregar 77 millones de alimentos saludables e inocuos para la atención integral de la población atendida por los servicios sociales de la Secretaría, el avance es considerablemente insuficiente. Desde el inicio del PDD hasta septiembre de 2025 se han entregado apenas alrededor de 27 millones de raciones; solo en 2025, hasta septiembre, se registran 20 millones de raciones, y la proyección para 2026 es entregar 22 millones. Esto implica que, para el último año del cuatrienio, deberían entregar aproximadamente 30 millones de raciones para poder cumplir con la meta total.

Lo que resulta llamativo es que, pese a este enorme rezago, el presupuesto destinado a esta actividad disminuye en un -19%, quedando en apenas \$88.833 millones. Esto genera dudas razonables sobre cómo piensa la Secretaría aumentar el número de raciones entregadas si proyecta hacerlo con menos recursos. La justificación ofrecida es que, según estudios sectoriales, se espera una disminución en los precios de los alimentos. No obstante, las cifras no cuadran: es evidente que no habrá una reducción del -19% en los costos de



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

los alimentos, y resulta imposible ampliar significativamente la entrega de raciones con un presupuesto recortado.


Teniendo en cuenta las cifras del DANE sobre inseguridad alimentaria moderada o grave, el 15,2% de la población de Bogotá se encuentra en esta condición. Esto equivale aproximadamente a 1.216.000 personas en 2024. Sin embargo, hasta septiembre de 2025 solo se han atendido cerca de 50.436 personas en los 135 comedores comunitarios actualmente en funcionamiento.

Esto representa apenas el 4,1% de la población que enfrenta inseguridad alimentaria en la ciudad, lo que evidencia una brecha significativa entre la magnitud del problema y la capacidad real de atención. Estos datos ponen en entredicho la efectividad de las metas planteadas por la administración en materia de entrega de alimentos y atención en comedores comunitarios. Como ya se advertía, este no es un frente priorizado por el gobierno distrital. En lo que respecta a la actividad 3 del proyecto de bienestar alimentario, relacionada con los equipos destinados a la vigilancia nutricional, se proyecta una reducción presupuestal del -44%, para un total de \$662.721 millones. A nuestro juicio, este recorte es un indicador claro de que el componente de bienestar dentro de los comedores comunitarios seguirá deteriorándose, tal como ocurrió durante el último año.

Vale recordar que la Secretaría de Integración Social decidió sustituir el enfoque de “*Inclusión social*” por el de “*Bienestar alimentario*” en el proceso competitivo No. SDIS DCT092-011-2024. Este cambio implicó una modificación sustancial en el modelo de atención: la responsabilidad de vincular a los 109 profesionales sociales requeridos dejó de estar a cargo de la ESAL ejecutora del convenio y pasó directamente a la Secretaría.

No obstante, lejos de garantizar la continuidad del equipo completo, la SDIS incorporó solo 10 profesionales sociales para atender los 135 comedores comunitarios actualmente en funcionamiento. Esta decisión no sólo profundiza las brechas en el acompañamiento psicosocial y comunitario, sino que también contradice la necesidad de fortalecer la vigilancia nutricional y el bienestar integral de las personas atendidas.

Asimismo, la administración distrital ha optado por “racionalizar el gasto” incluso en sectores donde ni siquiera logra ejecutar los recursos asignados, profundizando la exclusión de la población vulnerable, especialmente a través de los cambios introducidos en los criterios de focalización del SISBÉN. Un ejemplo crítico de ello es la nueva focalización implementada en los Comedores Comunitarios. Mediante la Resolución 0048 del 10 de enero de 2025, que adopta una ficha técnica con nuevos criterios de acceso, se excluye a todas las personas clasificadas en el SISBÉN desde el nivel C9 en adelante, es decir, personas que,

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


si bien no están categorizadas como pobres extremos o moderados, sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y alimentaria. Como consecuencia, alrededor de 5.433 personas quedaron por fuera de los servicios de los Comedores Comunitarios, no por una mejora en sus condiciones de vida, sino por un ajuste administrativo que limita aún más el acceso a un servicio esencial.

En este sentido, someter a los potenciales beneficiarios a procesos de priorización y reordenamiento dentro de los listados del servicio no representa una ampliación de la cobertura, sino que, por el contrario, amenaza con reducirla. Aunque la Secretaría expidió posteriormente otra resolución anunciando que de las personas inicialmente excluidas serían reincorporados los adultos mayores y las personas con discapacidad, esto no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, podría presumirse que, con el objetivo de cumplir la meta de abrir 165 comedores comunitarios al final del cuatrienio, la entidad estaría excluyendo beneficiarios actuales para habilitar cupos en los nuevos puntos de atención.

Por último, el aumento general del presupuesto de la Secretaría se refleja en programas que no necesariamente contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, pero que sí incrementan el presupuesto total de la entidad. Un ejemplo de ello es el proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional, que tuvo un aumento del 13,81%, pasando de \$493.808 millones a \$561.983 millones. Lo que resulta llamativo es que, pese a este incremento, la Secretaría de Integración Social ha emitido este año lineamientos que evidencian una desmejora en el fortalecimiento institucional.

En particular, la Resolución No. 2802 del 30 de diciembre de 2024, mediante la cual se actualiza la Plataforma Estratégica de la Secretaría y se deroga la Resolución 0456 de 2021, plantea un giro sustancial en el enfoque institucional, priorizando la gestión de alianzas estratégicas con el sector privado y la cooperación internacional, en lugar de fortalecer directamente la capacidad de atención y respuesta de los servicios sociales.

Aunque esta actualización estratégica mantiene una narrativa territorial, omite el énfasis que antes tenía la entidad en la necesidad de fortalecer su propia capacidad interna para operar. En la nueva orientación, se deja de lado la modernización institucional y la consolidación de su capacidad operativa, lo que sugiere una transformación en la manera en que la SDIS presta sus servicios, se privilegia la atención a través de terceros aliados, en detrimento del despliegue directo de personal y recursos propios. Esto representa un riesgo evidente de debilitamiento institucional, especialmente considerando que el aumento del presupuesto del proyecto contempla acciones como la gestión del talento humano, la gestión documental y ambiental, el apoyo logístico, la atención ciudadana y la modernización institucional. Así, los lineamientos recientes de la Secretaría resultan incoherentes frente al

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


destino presupuestal asignado, evidenciando una desconexión entre el discurso institucional y la inversión real necesaria para fortalecer sus funciones esenciales.

Por otro lado, una muestra evidente de la falta de compromiso de las entidades distritales con la atención de las poblaciones vulnerables es la baja ejecución presupuestal registrada en años anteriores. A diciembre de 2024, 11 de los 13 proyectos de la Secretaría presentaban una ejecución inferior al 70%, pese a tratarse de iniciativas esenciales para garantizar derechos básicos. Resulta especialmente grave que proyectos como el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales apenas alcanzarán una ejecución del 3,8%, o que el proyecto de inclusión social y productiva para la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad llegará solo al 17,7%. Asimismo, el proyecto de generación de bien-estar alimentario y nutricional mostró un nivel de ejecución de apenas 41,13%. Estos datos evidencian no solo fallas estructurales de gestión, sino una clara despriorización de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo requieren.

Es decir, esta administración no demuestra un interés real en invertir los recursos necesarios para enfrentar la pobreza en la ciudad, y aun cuando cuenta con el presupuesto, no lo ejecuta, porque estas acciones no constituyen una prioridad efectiva dentro de su agenda. Aunque la administración justifica la baja ejecución alegando que los recursos ya están comprometidos y que se harán efectivos al cierre del año, lo cierto es que la evidencia muestra lo contrario: en 2024 la ejecución total a diciembre fue de apenas 62,14%. Este resultado muestra no solo la falta de voluntad política, sino también deficiencias graves en la gestión y ejecución de los recursos destinados a atender las necesidades de la población más vulnerable.

Lo poco que se invierte con este propósito se orienta únicamente a cumplir metas técnicas, más propias de un plan diseñado para mostrar resultados en el papel que para garantizar una ciudad inclusiva y con oportunidades para las personas más vulnerables. Por eso insistimos en la necesidad de abandonar el argumento de la “racionalización del gasto” como excusa para excluir beneficiarios de los servicios sociales, mientras que en burocracia sí se destinan recursos significativos. Los criterios de salida de los programas deben aplicarse sólo cuando exista evidencia clara de que la persona ha superado su condición de vulnerabilidad.

Tampoco es aceptable que, bajo la misma justificación, se deterioren los servicios sociales o se limiten a la entrega de raciones alimentarias u otras ayudas puntuales, sin incorporar componentes que fortalezcan el bienestar emocional y psicosocial de los usuarios, por ello, más allá de la prestación de los servicios es necesario fortalecer todos los componentes

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

que lo integran y/o añadir otros que realmente garanticen mejorar de manera integral las condiciones de vida de la población a la que se quiere llegar.


Mientras tanto, otros programas de infraestructura reciben recursos suficientes para robustecer el negocio de la movilidad, cuando la inversión en infraestructura social también debería ser prioritaria y no continuar con retrasos en su ejecución y entrega, especialmente en un contexto de creciente demanda de la población vulnerable. Finalmente, es positiva la mejora en la gestión pública siempre que no vaya en detrimento del fortalecimiento institucional de la Secretaría ni se traduzca en lineamientos que reduzcan su capacidad, bajo la lógica de trasladar responsabilidades hacia alianzas con privados o cooperación internacional.

### Comisarías de Familia

Dentro de los proyectos que orientarán la gestión institucional de la Secretaría de Integración Social está el “*Fortalecimiento de las Comisarías de Familia*”, para ello dispone en la exposición de motivos la creación de 55 nuevos cargos de planta para robustecer los equipos comisariales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y atención a las situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, de esta afirmación se desprenden dos problemas:

Problema 1, Creación de comisarías de familias: se contradice esta administración entre lo contemplado en su propio plan de desarrollo con relación a la ampliación de los servicios de las comisarías de familia, que se fundamenta en la ley 2126 de 2021 y lo que se plantea para el 2026 en términos presupuestales. El compromiso consignado en el acuerdo 927 de 2024 fue el “*aumentar el número de comisarías fijas; sea en jornadas de atención permanente y/o semipermanente; o creando nuevas comisarías con carácter móvil*” esto dado el déficit de comisarías respecto de la población en la ciudad.

Con la propuesta de la secretaría se entiende que esta tarea no se realizará en el mediano plazo, más aún cuando no se cuenta siquiera con estudio de focalización. Se maquilla el cumplimiento de su deber legal, tanto en la presentación, como en el documento de anteproyecto donde se destinan los rubros hacia formalizar durante el cuatrienio 51 equipos interdisciplinarios actuales y ampliar en 16 el número de equipos para llegar a 67, creando 5 equipos comisariales nuevos, si bien esta gestión sirve para robustecer el funcionamiento de las Comisarías de Familia, que hace parte del plan de mejoras que demandan las mismas, no atienden al compromiso distrital previamente descrito.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


No hay claridad ni detalle de dónde van a trabajar estos equipos, dónde se ubican los despachos, bajo qué condiciones, o en cuáles localidades, esto pese a que se dispone de \$9.737 millones, es decir un 23.86% del presupuesto de la Secretaría para el fortalecimiento de las comisarías, en contraste, la ejecución presupuestal a corte de diciembre del 2024 fue apenas del 55,71% y a septiembre del 2025 para ese mismo proyecto muestra sólo un 64,33% de compromisos en ejecución presupuestal y 40,70% en giros.

Para la regulación, creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se tienen unas características específicas para las instalaciones e infraestructura, que se deben garantizar como mínimo para su funcionamiento, por ello, y aunque en el anteproyecto se describe que *“de cara a la apertura de los cinco (5) nuevos equipos interdisciplinarios, se contemplan recursos para arrendamiento y adecuación locativa para los equipamientos, dotación tecnológica y para cubrir los servicios públicos, vigilancia, aseo y cafetería”* dichos montos no guardan relación ni coherencia presupuestal en lo que demanda la capacidad de infraestructura calculados por el comité de traslado, ya que la creación de estos nuevos equipos deben ir atados de unas condiciones que no se están presupuestando, por ello, la forma como se proyectaron los recursos no se acerca siquiera a lo propuesto ni por el PDD ni por la ley.

En la misma línea de lo que se ha propuesto, esta administración en diferentes entidades en función de burocratizar aún más el aparato de gobierno, se ratifica con esta propuesta, ya que aunque no garantiza los recursos para cumplir lo requerido en instalaciones e infraestructura, si se consideran recursos para la contratación de una intervención especializada en consultoría por valor de \$500 millones y la continuidad de una contratación por valor aproximado de \$97 millones, para diseñar y coordinar el plan que se implementará durante la vigencia del 2026.

Es importante destacar, que actualmente la ciudad de Bogotá cuenta solo con 38 Comisarías de Familia para atender más de 8 millones de habitantes las cuales ya tienen déficit de personal, equipamientos e infraestructura, lo que no se ajusta a la realidad y exigencia contemplada en la Ley 2126 de 2021, que dispone que por cada 100.000 habitantes debe existir una Comisaría de Familia, ya que el fortalecimiento proyectado solo se enfoca en sostener precariamente lo que se tiene en marcha, y no en avanzar en solucionar esta necesidad.

Los despachos comisariales, para cumplir y atender los derechos de las víctimas de violencia en el Contexto Familiar y pese al déficit tan alto de operación, deben sobrecargarse, para de esta manera alcanzar el 72% de índice de oportunidad de atención, mencionado en el anteproyecto.


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Problema 2, Traslado a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (SSCJ): el Artículo 22 del PDD definió el traslado de las Comisarías de Familia. Las funciones de estas pasarían de la Secretaría Distrital de Integración Social, a la Secretaría Distrital de Seguridad, en un periodo no mayor a dos (2) años, es decir, para el primer semestre de 2026. Para ello se conformó y se reglamentó el comité para el traslado de las Comisarías.

Sin embargo, se refleja con este presupuesto una desconexión total entre entidades responsables que pone en riesgo el cumplimiento de este propósito, pese a que el tercer informe de implementación del plan de traslado de las Comisarías, en la programación de junio de 2025 sobre los recursos de traslado y operación, se informó que para los meses de enero y febrero de 2025, la Secretaría realizó el costeo detallado de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos, necesarios para la preparación del traslado de los componentes y la operación de las Comisarías en la entidad, estableciendo una metodología para ello, entregando a la Secretaría de Seguridad información de costos, contratos, personal, características de bienes muebles e inmuebles que componen la operación actual de las comisarías, así como lo concerniente a los procesos de apoyo, bajo la estructura y organización de la Secretaría de Integración Social.

En dicho informe se concluyó que el proceso de traslado de las Comisarías de Familia avanza conforme a la planificación establecida que se contaba con el costeo y programación de recursos comprometidos en la operación de estos despachos. También, que la Secretaría de Seguridad culminó la programación o estimación de los recursos que requiere, tanto para el alistamiento institucional como para la operación de las Comisarías de Familia en su entidad.

Pese a ello, no se entiende por qué ni en el anteproyecto, ni en la presentación de presupuesto se proyectan estos recursos para el 2026, es decir, no habría traslado de comisarías en la forma en la que se planteó, generando mayor volumen de gestión documental, mayores problemas técnicos y un notorio desacuerdo y descoordinación entre ambas entidades. Por todo lo anterior, no apoyamos el proyecto de presupuesto en relación a las Comisarías de Familia, pues denota improvisación, desorden y desatención a los compromisos de ley y del propio PDD, no solo en función de los artículos relacionados con los despachos comisariales, sino también en el programa de cero tolerancias de violencias contra las mujeres, ya que las Comisarías de Familia son la puerta de acceso a la justicia para las víctimas de violencia en el contexto familiar debido a que se encargan de brindar atención especializada para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género y/u otras violencias en el contexto familiar. Sin embargo, de la manera como se plantea este programa deja ver

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

que para el 2026 contrario a lo que se plantea, las problemáticas de funcionamiento de las comisarías van a continuar.

## Sector Mujer

En un contexto en el que Bogotá enfrenta desafíos crecientes en materia de violencias basadas en género (VBG) y fortalecimiento de las redes de cuidado, resulta indispensable que la política pública para las mujeres cuente con los recursos suficientes para garantizar su continuidad y expansión. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para 2026 muestra señales preocupantes respecto al compromiso de la administración con esta agenda.

El presupuesto vigente a septiembre de 2025 para la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) asciende a \$141.442 millones, mientras que el proyectado para 2026 se reduce a \$139.994 millones. Esto implica una disminución total del -1,02%, equivalente a -\$1.448 millones menos para la entidad y de -2,80% en inversión. Aunque podría parecer un ajuste menor a simple vista, en realidad se traduce en recortes que comprometen la calidad y la continuidad de los servicios dirigidos a las mujeres en Bogotá. Varias iniciativas presentan reducciones cercanas a los \$200 millones, y el programa de Gobierno Territorial enfrenta un recorte superior a los \$2.500 millones.

Si bien la entidad ha anunciado planes de contingencia para mitigar posibles afectaciones, preocupa que la magnitud de estos recortes reduzca tanto la capacidad operativa como la eficacia de los servicios ofrecidos. Estas disminuciones ponen en riesgo la sostenibilidad de acciones fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres en la ciudad y podrían limitar seriamente el alcance de las estrategias de prevención, atención y empoderamiento.

En este sentido, a continuación, presentamos nuestras principales preocupaciones respecto al proyecto de presupuesto de la SDMujer, con el fin de evidenciar los riesgos que implican estos ajustes y la necesidad de fortalecer, y no debilitar, la política pública para las mujeres en Bogotá.

## Sistema Distrital de Cuidado

El Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), la apuesta más relevante para reconocer, redistribuir y reducir las tareas del cuidado en nuestra ciudad presenta un incremento mínimo en su asignación presupuestal. El presupuesto vigente a septiembre de 2025 asciende a \$12.425 millones, mientras que la propuesta para 2026 contempla \$12.559 millones, lo que representa una variación de apenas el 1,08%, equivalente a un aumento de \$134 millones.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


Esto significa que los recursos destinados al SIDICU corresponden únicamente al 8,97% del presupuesto total de la SDMujer, lo cual evidencia la insuficiencia de la financiación asignada a una política que, aunque se reconoce discursivamente como estructural para la igualdad de género, en la práctica sigue sin contar con el respaldo presupuestal necesario para consolidarse como un sistema integral y sostenible.

La variación prácticamente simbólica del rubro del SIDICU, sumada a la directriz de austeridad definida por la administración distrital, tiene efectos significativos sobre el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento, implementación, seguimiento y coordinación del SIDICU en Bogotá. La precariedad de los recursos se refleja con particular claridad en la reducción de las duplas de atención psicojurídica, que pasarán de 33 a 24. Esta disminución es especialmente crítica: las duplas han demostrado ser una herramienta esencial para identificar situaciones de violencia y vulneración de derechos en casos donde las mujeres enfrentan miedo, presión o barreras para denunciar. Reducir su número implica sobrecargar aún más a los equipos restantes (que ya trabajan bajo modalidades OPS y con cargas laborales elevadas) y deteriora la capacidad institucional de respuesta.

Lo anterior resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que esta sobrecarga ya había sido advertida en el Informe 2025 del SIDICU y denunciada por nosotras en el marco del debate de control político que adelantamos sobre el sistema. En este contexto, el ajuste presupuestal propuesto no solo desconoce las necesidades reales del cuidado en la ciudad, sino que además amenaza con profundizar las brechas que el SIDICU busca justamente cerrar.

Esta situación se agrava al hacer una revisión del anteproyecto de la Secretaría de la Mujer, pues señala que inicialmente el proyecto de inversión que proyectó necesidades por valor de \$14.783 millones y dada la información en el marco de la cuota global de gasto 2026, se realizó un ajuste en \$2.223 millones que afectó principalmente la programación de contratos de prestación de servicios. En este sentido la SDMujer advierte que con los recursos asignados únicamente fue posible programar la contratación de talento humano por un período de nueve meses y quince días. Frente a esta situación vale la pena preguntar a la administración ¿Cómo funcionará el SIDICU a partir de septiembre de 2026, cuando se culminen los contratos y no haya recursos para renovarlos?

Adicionalmente, este recorte implica la eliminación de procesos fundamentales para la difusión y socialización de las acciones desarrolladas en las Manzanas del Cuidado, como las impresiones gráficas, la papelería, la central de medios, entre otros. Todo lo anterior genera un riesgo evidente en el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto de inversión 8219. La pregunta aquí es inevitable: ¿cómo espera la administración cumplir la

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


meta de vincular a 2.492 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que promuevan y garanticen sus derechos, si no existen los insumos mínimos para dar a conocer lo que ocurre al interior de las Manzanas del Cuidado? Sin herramientas de difusión, se limita el alcance, la participación y el impacto real de esta política.

Ahora bien, como ya lo habíamos señalado en nuestro debate de control político, el cumplimiento de algunas metas del SIDICU resulta preocupante. Aunque el PDD fijó como meta llegar a 30 Manzanas del Cuidado, actualmente solo funcionan 25, y la administración proyecta cerrar la vigencia con 27 Manzanas fijas y dos Buses del Cuidado en operación. En teoría, esto permitiría terminar el año con 29 servicios activos; sin embargo, no hay garantía de que dichas Manzanas y buses cuenten con las condiciones presupuestales, operativas y de personal necesarias para funcionar de manera adecuada y continua.

En este sentido, nuestra preocupación principal se centra en el funcionamiento de las Manzanas del Cuidado durante la vigencia 2026. Aunque la administración proyecta llegar a 30 Manzanas en operación, la decisión política de reducir los recursos destinados a la SD Mujer afecta directamente la capacidad del SIDICU para asegurar su sostenibilidad. Esto plantea una pregunta legítima: ¿es realmente viable operar 30 Manzanas del Cuidado con el presupuesto propuesto y con las dificultades que ha señalado la Secretaría en su anteproyecto, o estaremos frente a nuevos episodios como el de los Buses del Cuidado, ¿que dejaron de funcionar desde el 30 de abril de 2024?

Si bien existen recursos comprometidos en vigencias futuras para el funcionamiento de un bus rural y uno urbano hasta el 31 de diciembre de 2027 por \$5.776 millones, la realidad evidencia un retroceso alarmante. Las unidades móviles dejaron de operar por más de año y medio, generando una ausencia prolongada de servicios en territorios que dependen de esta oferta. Aunque la reapertura anunciada para este año es necesaria, no resuelve el déficit acumulado ni las afectaciones sufridas, especialmente en zonas rurales. El caso de Sumapaz (la única localidad sin una Manzana fija) es el más crítico. Como ya lo señalamos en nuestro debate los buses fueron diseñados para suplir esta ausencia, pero su presencia ha sido mínima: solo 240 atenciones en cuatro años, con una tendencia marcadamente regresiva (217 en 2021, 30 en 2022, apenas 9 en 2023 y ninguna registrada en 2024). Esto evidencia un abandono sistemático del enfoque rural del SIDICU y una afectación directa a las mujeres de Sumapaz, quienes enfrentan mayores barreras geográficas, económicas y de movilidad para acceder a los servicios.

Por situaciones como esta, el futuro del SIDICU resulta profundamente incierto. Estamos ante un escenario en el que los avances logrados en materia de cuidado corren el riesgo

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


de convertirse en retrocesos debido a la insuficiencia presupuestal para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema. La administración distrital ha decidido orientar los recursos de las y los bogotanos hacia las grandes arcas del sector privado: más TransMilenio, más edificios, más cemento y, en contraste, menos inversión social. Estos recortes específicos comprometen la calidad de los servicios de cuidado, la atención a las mujeres víctimas de violencias y la cobertura territorial del sistema. En conjunto, representan retrocesos sustanciales para la garantía de derechos, la prevención de violencias y la equidad de género en Bogotá.

Finalmente queremos dejar una última alerta sobre la mesa que planteamos en el marco de nuestro debate de control político, pero que además ha advertido el informe del SIDICU. El nivel de conocimiento y apropiación del enfoque y los objetivos del Sistema es altamente heterogéneo entre las entidades y profesionales involucrados, lo que en varios casos obstaculiza la coordinación entre actores y la integración de los servicios.

Muestra de ello es que, ni en el marco del proyecto de presupuesto ni en los anteproyectos, es claro cuáles son los rubros que las demás entidades destinan al funcionamiento de los servicios que ofrecen dentro del Sistema, ni tampoco los recursos asignados para el funcionamiento de las entidades ancla. Estas últimas, a pesar de ser responsables del mantenimiento y la operación de los equipamientos donde se ubican las Manzanas del Cuidado, no presentan un desglose presupuestal que permita conocer con precisión cuánto aportan realmente al SIDICU. Consideramos fundamental que exista esta información, pues la sostenibilidad del Sistema depende de una articulación financiera interinstitucional clara y verificable.

A esto se suma que, en las reuniones que sostuvimos con las entidades, muchas no pudieron responder a la pregunta sobre cuánto dinero de su presupuesto destinan al Sistema Distrital de Cuidado. Esta falta de claridad no solo evidencia una débil coordinación interinstitucional, sino que además pone en riesgo la capacidad del del SIDICU para cumplir sus metas y garantizar la prestación adecuada de sus servicios.

Adicionalmente, la falta de información clara entre entidades y los recortes anunciados por la administración distrital configuran un escenario que pone en riesgo la continuidad, el fortalecimiento y la sostenibilidad del Sistema Distrital de Cuidado. La ausencia de un desglose preciso de los aportes interinstitucionales, sumada a la reducción de equipos clave y a la incertidumbre sobre el funcionamiento de las Manzanas y los Buses del Cuidado, evidencia una debilidad estructural en la planificación y en la priorización del cuidado como política pública. Sin una inversión robusta, transparente y articulada, los avances alcanzados en los

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


últimos años pueden no solo estancarse, sino retroceder, afectando de manera directa a las mujeres, especialmente a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

## Prevención y atención a Violencias Basadas en Género

El presupuesto del Distrito para 2026 representa un retroceso en la atención a las violencias basadas en género (VBG) en Bogotá. Aunque las cifras evidencian por sí mismas la urgencia de fortalecer y ampliar la ruta de atención a las víctimas de VBG, la voluntad del gobierno distrital parece avanzar en la dirección contraria. Pese a que esta no es una tarea que, aislada, se diluye el compromiso de articular a las instituciones distritales en el cumplimiento del programa “*Cero tolerancias a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género*”, relegando casi exclusivamente esta responsabilidad a la Secretaría Distrital de la Mujer.

Aunque el 46,7% del presupuesto de la SDMujer se destina al objetivo del programa *Bogotá Avanza en su Seguridad*, los proyectos que más han visto una disminución en su inversión son precisamente los relacionados con la estrategia de *Cero Tolerancia a las Violencias Basadas en Género* (VBG) y la atención a las víctimas. Entre estos, destacan los siguientes: (I) “*Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C.*” (-2,32%), (II) “*Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C.*” (-6,99%) y (III) “*Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C.*” (-5,12%). Esto contrasta con el hecho de que la ejecución de la inversión, a septiembre de 2025, no supera el 55%.

Ahora bien, estas disminuciones se reflejarán, por un lado, en una menor contratación de profesionales y apoyos administrativos y territoriales, lo que afectará la calidad y continuidad de los servicios. La administración plantea resolver esta situación con el ingreso de personal a la nueva planta programada para el primer semestre del próximo año, así como con la expectativa de contar con respaldo en vigencias futuras para el funcionamiento de las casas refugio y algunas CIOM. Sin embargo, esta justificación pierde sentido cuando aumentan las necesidades y metas de atención a mujeres, pero disminuye el personal disponible para asumir esta gestión. Además, fundamentar la reducción presupuestal en un compromiso que ni siquiera está incluido ni contemplado en la exposición de motivos no constituye un argumento válido. Por el contrario, abre la puerta a la improvisación en una problemática de alta complejidad para la ciudad.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Seguido, encontramos que la Secretaría de Seguridad, no contempla rubros de inversión por meta del PDD correspondientes al objetivo 1, “Bogotá avanza en seguridad”, en lo relacionado con la prevención y atención de las VBG. Esto confirma la falta de articulación institucional que el propio Plan de Desarrollo Distrital había planteado para este programa, al menos en términos presupuestales para 2026. En la práctica, esta situación evidencia una negativa del gobierno distrital a atender las causas de las VBG, pese a que estas se encuentran profundamente vinculadas con las condiciones de desigualdad y discriminación que enfrentan las mujeres, especialmente en las localidades más pobres de la ciudad. Esta ausencia se refleja en las prioridades marcadas por el presupuesto distrital, coherentes con su modelo de ciudad, y termina consolidando la inexistencia de una política distrital que transversalice de manera real la atención de esta problemática.


Esto es fundamental tenerlo presente, ya que la prevención y atención de las VBG solo se fortalece mediante acciones que mitiguen los riesgos, en consonancia con el compromiso asumido en el PDD de *“promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en todas sus diferencias y diversidades, especialmente el derecho a una vida libre de violencias, asegurando su integridad mediante programas de prevención, atención especializada, acceso a la justicia y articulación de acciones entre el orden distrital y nacional”*.

Sin embargo, el presupuesto distrital para 2026 queda limitado a garantizar únicamente el funcionamiento básico de los programas en curso. No se fortalecen las estrategias de articulación institucional ni el modelo de ruta integral; tampoco se robustecen los equipos de acompañamiento psicojurídico en los Centros de Atención de la Fiscalía y las URI. De igual forma, no se amplían los servicios sociojurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia a través de los distintos canales de atención, incluida la Línea Púrpura y demás mecanismos clave para la prevención y atención de las VBG.

En este sentido, no apoyamos este proyecto de presupuesto para 2026, pues, en los términos en que está planteado, agrava los factores de riesgo, desconoce la magnitud de las cifras, informes, alertas y recomendaciones sobre VBG, y no contribuye a garantizar que las mujeres puedan vivir, habitar y movilizarse sin miedo en la ciudad.

## **Economía Popular**

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la Economía Popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles tales como servicios domésticos o comunitarios desarrollados por unidades económicas de baja escala en cualquier sector económico. Dicha economía, que es fundamental para el desarrollo de Bogotá, fue negada dentro

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

del PDD de la administración Galán, oponiéndose enfáticamente en incluir este sector de la economía demostrando el desprecio que tiene hacia la gente que sobrevive del rebusque ante la falta de oportunidades en la ciudad.

El reciente estudio del DANE y las cifras del observatorio de desarrollo económico en Bogotá (2025) muestran un aproximado que permite conocer la importancia de este sector en la ciudad, este es la tasa de informalidad, que está cerca del 40%, lo que implica que, cerca de 1.800.000 personas se dedican a dicho sector de la economía, sabiendo de antemano que estas cifras pueden presentar subregistros.

En el marco del debate sobre presupuesto, analizando el sector de desarrollo económico y en específico al Instituto para la Economía Social, observamos que se refleja una reducción de cercana al -5% en el 2026 en comparación con el año inmediatamente anterior, con un cumplimiento en las metas del cuatrienio del PDD a corte 31 de octubre del 2025 que no superan el 40%. Lo que refuerza nuestra tesis de que dicha entidad ha perdido su objetivo misional de ser el Instituto para la Economía Social y se ha convertido en una inmobiliaria del espacio público que se dedica casi de manera exclusiva al cobro de arrendamientos para soportar la costosa burocracia de gastos de personal y adquisición de bienes y servicios de su sede administrativa que son los rubros que año a año crecen, mientras la inversión se reduce, para el presupuesto 2026, el funcionamiento aumenta en cerca del 4% y es más del 26% del presupuesto total de la entidad.

Ahora bien, analizando el presupuesto de inversión propuesto para el 2026, nos parece alarmante la reducción de rubros de inversión destinados al objeto misional, donde proponen una disminución de más del -35% en programas de fortalecimiento a las unidades de negocio de la economía informal o mantenimiento de infraestructura de las plazas de mercado, mientras que, proponen aumentar el rubro de “administración” para las plazas, es decir, menos infraestructura, más burocracia.

De los \$65.033 millones para inversión, cerca de \$20.000 millones se destinan a personal contratado mediante prestación de servicio, \$3.000 millones más que el mismo rubro de gastos de personal propio de la entidad, es decir, el Instituto para la Economía Social es una máquina de contratos y puestos, de la misma manera, esta entidad costosa y poco eficiente, se gasta \$12.000 millones en vigilancia y \$5.200 millones en cafetería y aseo, \$4.600 millones en servicios públicos, mientras entre plazas de mercado y ferias comerciales apenas se superan los \$10.000 millones en el presupuesto. Con relación a la población vendedora informal, existe una reducción en cerca de -\$1.200 millones para los programas de aprovechamiento del espacio público donde converge esta población, aumentando los conflictos en el espacio público.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Sumado a todo lo anterior, queremos destacar que se reduce en -\$400 millones el presupuesto para la inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. Esto último es de especial preocupación, ya que según las cifras el crecimiento económico de la ciudad de Bogotá se ha visto apalancado principalmente por el sector de la construcción con una variación anual del 10.8%, no obstante, las actividades como el comercio apenas han tenido una variación del 1.8% y la industrial del -2.4%; es decir, a esta administración no le importa que la dinamización de su economía sea con base en el fortalecimiento de la industria y el comercio, por el contrario, son los sectores a los que más ha afectado con propuestas como la de incentivos tributarios que regalaban la renta del uso del suelo a extranjeros, mientras que a los locales se les trasladaba toda la carga fiscal, al mismo tiempo, disminuye los recursos para el fortalecimiento de estos sectores.

En ese sentido, no acompañamos esta propuesta de presupuesto, ya que es la materialización de una política distrital de rezago institucional a lo popular, en donde justamente los proyectos que mayor reducción tuvieron del presupuesto son aquellos en donde se ubica este sector, y aunque el acuerdo Distrital 257 de 2006 en su artículo 79 le otorga al Instituto para la Economía Social la función de administrar las plazas de mercado y la política de abastecimiento alimentario distrital, no se proyecta una sola acción en este sentido, si bien, aunque del objetivo estructurante de *“Bogotá confía en su bien estar”* del programa 08 *Erradicación del hambre en Bogotá* traza unos proyectos de inversión con unos rubros importantes en este sentido, estos no se relacionan con dicho propósito y siguen la senda de burocracia que previamente señalamos, ya que el destino de los montos se asigna a la administración e infraestructura. Esta decisión estaría atada a la política de debilitamiento de las plazas de mercado en función de darle paso a los grandes comercios y desplazando a su habitante histórico.

En conclusión, el Instituto para la Economía Social que debería ser el eje institucional para fortalecer la economía popular, comunitaria y de pequeña escala, se ha transformado en una entidad costosa y desalineada de su propósito misional. El desprecio de Galán hacia la población más vulnerable de Bogotá se refleja con la reducción de recursos orientados al apoyo productivo, al mejoramiento de plazas de mercado y a la inclusión de quienes más lo necesitan, esto se contrasta con el incremento de gastos administrativos, los cuales, lejos de aportar a la seguridad alimentaria, al ordenamiento social del espacio público o a la superación de la pobreza, el Instituto para la Economía Social profundiza las tensiones existentes y desatiende a una población que requiere acompañamiento, oportunidades y políticas claras. Esto ratifica nuestra contradicción con este modelo de ciudad, que concibe el espacio público como una fuente inmobiliaria, nosotras concebimos el espacio y bienes públicos como el medio para que la población pueda vivir dignamente en Bogotá.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


## Sector Hábitat

En el caso del sector Hábitat, el presupuesto de inversión previsto para 2026 es de \$1.3 billones, incluyendo \$325.136 millones para asignación de subsidios de soluciones habitacionales. Es decir, este último rubro significa el 23% de la inversión de todo el sector. Si se hace el ejercicio exclusivamente con la Secretaría de Hábitat, esta tiene proyectada una inversión de \$810.815 millones. Así las cosas, lo asignado para subsidios de soluciones habitacionales representa el 40% de la inversión de la Secretaría de Hábitat. Sin lugar a dudas, como la inversión unitaria más grande, esta destinación para asignación de subsidios de soluciones habitacionales es la prioridad en la inversión del sector y, particularmente, de la Secretaría de Hábitat, cuya meta para el cuatrienio es de 75 mil subsidios.

De estos \$325.136 millones, la gran mayoría se dirige a subsidios para adquisición de vivienda nueva: 12.596 (81%) de 15.496 en 2026, lo anterior a través de los programas Oferta Preferente, Reactiva tu Compra y Reduce tu Cuota. Estos subsidios están direccionados a hogares con ingresos al mes de máximo 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para adquisición de viviendas VIS o VIP. A la vez, dichos subsidios solo son entregados a hogares que, con esta ayuda del Estado, demuestran que con recursos propios y/o crédito hipotecario alcanzan a tener cierre financiero, es decir, alcanzan a garantizar todo el recurso económico que demanda la compra de la vivienda.

Debido a las condiciones con las que se entregan dichos subsidios, la gran mayoría benefician a hogares que tienen ingresos entre los 1 y los 4 SMMLV, mientras los de 0 a 1 SMMLV quedan minimizados o excluidos ya que tienen recursos propios limitados y, además, es excepcional que un banco les otorgue un crédito hipotecario. Así, del total de subsidios entregados por el Distrito, los hogares con ingresos mensuales de 0 a 1 SMMLV pasaron de representar el 24% en 2024 a representar apenas el 16% en 2025. Cabe recordar que, acorde con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es la que se realiza para garantizar el derecho a la vivienda a los hogares de menores ingresos, y que los recursos que se destinan por parte del Estado para su adquisición se deben dirigir a la población más pobre del país.

En ese sentido, a nuestro criterio, la destinación del rubro es ilegal, al no estar dirigida prioritariamente a la población más pobre, es decir, a los hogares que se encuentran en el rango de ingresos mensuales de 0 a 1 SMMLV. Lo que pasa es que esta inversión no está realmente direccionada a garantizar el derecho a la vivienda de los más pobres, que es en lo que debería enfocar sus acciones y recursos el Estado, sino que está dirigida a mantener el negocio del oligopolio privado que controla la construcción de la VIS en el país: el grupo Bolívar y compañía, disfrazándose de buenas intenciones. Y con esto no queremos decir

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

que no se atiende a los de 1 a 4 SMMLV, pero los otros deberían ser la prioridad y no hay ni la mínima preocupación porque ello ocurra.


Hasta que los beneficiados no sean los más pobres, como lo demanda la ley, nosotros no estaremos de acuerdo con que la prioridad en la inversión sea la de los subsidios para adquisición de vivienda nueva. A contracara, para la ciudad popular, el presupuesto previsto para 2026 es mínimo: apenas 2.600 subsidios de mejoramiento de vivienda, solo \$4.972 millones para intervenciones en el marco de los PIMI-Hábitat, limitados \$50.665 millones para infraestructura y espacio público en áreas de tratamiento de Mejoramiento Integral y escasos \$ 1.049 millones para la legalización y formalización de asentamientos informales. Debido a estos motivos, no avalamos el presupuesto presentado por la Administración y nuestra ponencia es negativa.

### **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos**

El año 2026 traerá uno de los principales retos para la administración Galán y el sector hábitat en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que ha producido de manera planificada, coordinada y milimétricamente concebida para favorecer a los operadores privados de los servicios de recolección, barrido y limpieza de la ciudad. A partir de febrero, cuando finalicen los contratos vigentes, Bogotá pasará formalmente al esquema de libre competencia. Bajo este modelo, se supone que los prestadores del servicio competirán ofreciendo mayor eficiencia, calidad y cobertura, en beneficio de los usuarios, el falso sofisma del mercado, que en la práctica no es otra cosa que extraer la mayor cantidad de ganancia a menores costos de operación.

En nuestro concepto, la libre competencia muestra riesgos evidentes para una ciudad como Bogotá, ya que no existe obligación a los operadores de atender todas las zonas de la ciudad como sí ocurría bajo el modelo de áreas de servicio exclusivo (ASE). En el nuevo modelo, cada empresa elige los territorios en los que prestará el servicio según su conveniencia económica, lo cual conduce a que los operadores se concentren en áreas de alta rentabilidad con mayor densidad poblacional, facilidad de acceso y capacidad de pago, dejando descubiertas las zonas periféricas de difícil acceso. Esto implica exclusión y segregación social, acumulación de residuos en los barrios populares, problemas de salud pública y deterioro ambiental, a su vez, el aumento de residuos en el espacio público y la multiplicación de los denominados puntos críticos que son atendidos por la UAESP.

En este contexto de riesgo, nos parece preocupante que dentro del presupuesto no se contemplen recursos para el fortalecimiento de la UAESP y la empresa pública Aguas de Bogotá ESP que es la responsable de atender los puntos críticos, es más, es tan descarada

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

la administración de Galán, que para el año 2026 se reducirá en más de \$8.000 millones de pesos los recursos destinados para la atención de estos puntos, eso quiere decir que, en el año de las crisis, la entidad va a tener menos recursos para atenderlas.

Pero lo más contradictorio, es que mientras la empresa Aguas de Bogotá ESP ya demostró en el pasado la capacidad de cubrir más del 50% del servicio, generar utilidades para la ciudad, crear más de 1.500 empleos directos e indirectos, y vincular de manera digna a las familias recicladoras como lo ordena la Corte Constitucional, para el 2026 nuestra empresa pública espera generar una disponibilidad final de más de \$18.000 millones, un imaginario en donde realmente potenciemos esta empresa para competir en el mercado y convertirse en la mejor herramienta para regular precios y evitar abusos monopólicos.


Pero nuestra crítica al presupuesto propuesto para la UAESP no es sólo en relación con el servicio de aseo, en la Bogotá camina in-segura donde nos ha llevado esta administración, para el 2026 hay una reducción de más de la mitad del presupuesto para el alumbrado público, cerca de -\$11.000 millones de pesos, esta disminución en el presupuesto es la manera en que la administración manipula descaradamente al Concejo para la aprobación el regresivo e impertinente impuesto al alumbrado público.

Si bien esta administración ha señalado que la reducción corresponde a su expectativa del impuesto y que sea a través de este que se destinen los recursos, la realidad es que, tras 2 años de esta administración, ese impuesto no ha querido ser aprobado por su afectación principalmente a la clase media y a las MiPymes de la ciudad.

## **Sector Ambiente**

El análisis del presupuesto en materia ambiental evidencia una tendencia preocupante que afecta de manera directa la capacidad institucional para responder a los retos ambientales de Bogotá. El discurso ambiental que profesa el Alcalde Galán no es más que una cortina de humo que permite esconder el verdadero asiento de su política neoliberal, lo ambiental como accesorio para incrementar el valor especulativo del suelo en zonas de interés inmobiliario, mientras endeuda a la ciudad con la expedición de los mal llamados bonos verdes por cerca de \$2,3 billones, recursos que se utilizarán para proyectos viales convirtiéndose en una estrategia de marketing engañosa con el medio ambiente que desnaturaliza el propósito de las finanzas sostenibles.

Al mismo tiempo, la Administración desatiende los grandes conflictos ambientales relacionados con la gestión del riesgo (particularmente en el oriente de la ciudad), la grave contaminación por ruido y aire que afecta a toda Bogotá, el profundo déficit de arbolado urbano

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


y la ausencia de estrategias reales de adaptación al cambio climático, situación que quedó en evidencia con los incendios forestales de comienzos del año. A ello se suma la ineficiencia en la planificación del abastecimiento hídrico para una población en crecimiento, lo cual se ha manifestado en la inédita crisis de suministro de agua que enfrenta la ciudad.

Nos parece irresponsable de parte de esta administración, que mientras intenta trasladar la responsabilidad de las malas medidas implementadas, para el 2026 reduzca presupuestalmente los rubros destinados en las diferentes entidades del sector, *al fortalecimiento de la educación ambiental, participación y atención ciudadana para la resiliencia climática en Bogotá D.C.* con una reducción del -46,67% en el IDIGER, el -17% en la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el -5,73% en el Jardín Botánico, demostrando que mientras culpa a la ciudadanía por los desastres ambientales, institucionalmente hace poco para elevar la cultura y educación ambiental que es la base fundamental para transformar el relacionamiento con la naturaleza y el fortalecimiento a las comunidades para que tengan herramientas frente a los retos ambientales.

En cuanto a presupuesto, el sector en general tiene una disminución de recursos en comparación con el año inmediatamente anterior, acentuándose principalmente en recursos para inversión, que representa principalmente el dinero disponible para el cumplimiento de los objetivos misionales de cada una de las 4 entidades que lo componen. Del total del sector, cerca del 58% del presupuesto se destina a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el 17% a Jardín Botánico, el 14% al IDIGER y el 11% restante al IDPYBA para un total de cuota global de \$417.887 millones.

La Secretaría Distrital de Ambiente presenta un nivel de ejecución en los recursos de inversión menor al 50% a septiembre del 2025, patrón que se repitió en 2024, esta insuficiente capacidad operativa no refleja falta de necesidades, sino dificultades para poner en marcha los proyectos de la entidad. Con relación a la proyección presupuestal para 2026, nos genera particular atención la reducción del presupuesto en -32,06% para el componente destinado al mejoramiento de la calidad del aire, auditiva y visual, proyecto que es transversal a 3 metas del PDD y es responsable del monitoreo, medición, evaluación, control y sanción de factores de deterioro ambiental en estos componentes, repercutiendo en una menor disponibilidad de instrumentos técnicos, una reducción en la capacidad de fiscalización y la pérdida de oportunidades para aplicar medidas correctivas o sancionatorias que podrían incluso generar ingresos a través del cumplimiento de la normativa ambiental y el código de convivencia.

Por último, y basado en el diálogo que hemos tenido con la secretaría, consideramos que se debe dar un debate más amplio y de priorización de necesidades en el sector ambiental;


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

con relación a la Casa Ecológica de los Animales, un proyecto que se anuncia ejecutado al 100%, pero que para lograr su funcionalidad, FINDETER calcula que hay que destinar \$15.500 millones adicionales para terminar la obra y cubrir los costos de interventoría y asistencia técnica y que se encuentra contenido dentro del rubro de fortalecimiento institucional para el presupuesto 2026.

Con relación al Jardín Botánico, la ejecución con la que terminó el 2024 fue superior al 70% para la mayoría de sus programas, a septiembre de 2025 presenta una ejecución por encima del 45%, esto evidencia un comportamiento estable en la gestión presupuestal, sin embargo, para la vigencia 2026 se contempla una reducción general del -3.19%, disminuyendo así su efectividad en los procesos de restauración ecológica, investigación, educación ambiental y en la gestión del arbolado urbano.

Aquí, queremos hacer especial énfasis en un aspecto que no vemos claramente plasmado en el presupuesto, y son los recursos específicos para el cumplimiento del artículo 187 del PDD relacionado con la actualización del censo de arbolado urbano proyecto que consideramos de vital importancia para diagnosticar de manera precisa el déficit y las zonas de mayores necesidades. Sumado a esto, dentro de la propuesta presentada vemos que, mientras se reducen los recursos para inversión, aumentan en 34.39% los recursos para la adquisición de bienes y servicios y se reduce en -22.3% el rubro para el fortalecimiento de la entidad que es transversal a 8 metas del PDD, lo que demuestra que esta administración debilita una de las entidades más queridas por la ciudadanía mientras incumple los pocos elementos progresivos del PDD.

La gestión del riesgo es una función del Estado para garantizar la protección efectiva de la vida especialmente en contextos urbanos donde las desigualdades territoriales profundizan la exposición a amenazas, esto implica reconocer que los eventos adversos no afectan a todos por igual, en Bogotá las zonas de mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental es donde el riesgo en mayor medida se concentra. Por ello, fortalecer institucionalmente al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) constituye, en esencia, una forma de atención preferente a las personas que más lo necesitan. En este sentido, gestionar el riesgo no es solo una responsabilidad técnica, sino un compromiso ético con la equidad y la protección de las poblaciones, reflejo inexistente en este proyecto de presupuesto, con reducciones globales a la entidad del -3.53%, con reducciones de cerca de -\$2.000 millones para la generación del conocimiento asociado a la gestión del riesgo, y cerca del -50% del presupuesto para fortalecer de la capacidad institucional de la entidad, siendo esta la coordinadora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en las instancias locales de Bogotá D.C., toda una contradicción la administración Galán.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

## Sector Educación

Por otro lado, consideramos trascendental que el segundo sector con mayor participación dentro del presupuesto sea el de Educación, pues sin duda representa uno de los derechos fundamentales que deben fortalecerse en Bogotá. Todas las personas deben tener acceso a una educación pública, digna y de calidad. El presupuesto propuesto para el sector educativo asciende \$9.1 billones y representa el 22,5% del presupuesto total, distribuidos entre cuatro entidades: la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con \$7.7 billones; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD), con \$545.641 millones; el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), con \$16.402 millones; y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), con \$768.444 millones.

Ahora bien, queremos iniciar centrándonos en el presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito, que concentra el 85,3% del total de los recursos asignados al sector educación. Según el proyecto de presupuesto, a septiembre de 2025 el presupuesto vigente de la SED asciende a \$7.1 billones, mientras que para 2026 se proyecta un monto de \$7.7 billones, lo que representa una variación del 9,15 % es decir un incremento de \$649.774 millones adicionales.

Sin embargo, más allá de la magnitud de la cifra, el análisis detallado del presupuesto evidencia importantes limitaciones en su orientación y alcance. Es así como se identifica que uno de los rubros más importantes se encuentra en el concepto *“Mejoramiento del bienestar integral de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales de Bogotá D.C.”* Este cuenta con una asignación de \$991.545 millones, de los cuales \$825.870 millones corresponden a los recursos que la administración destina al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Es decir, el 83,3% de este concepto está dirigido a la financiación del PAE.

Ahora bien, tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, se espera que 733.402 estudiantes cuenten con alimentación escolar. Sin embargo, esta cifra difiere de la proyección de matrícula presentada por la Secretaría de Educación para el año 2026. Según sus estimaciones, la matrícula total sería de aproximadamente 688.000 estudiantes, de los cuales cerca de 38.538 estarían matriculados en los Colegios en Administración del Servicio Educativo (CASE). Esto significa que la población estudiantil proyectada en los Institutos Educativos Distritales (IED) y a quienes se les debería garantizar el PAE sería de 649.462 estudiantes. En consecuencia, el Programa de Alimentación Escolar estaría siendo planificado para 83.940 estudiantes más de los que la Secretaría estima matricular.

Ahora bien, la pregunta es entonces: ¿por qué la Secretaría de Educación planifica el ejercicio de matrícula (y, en consecuencia, el funcionamiento de los colegios y la asignación de docentes) con un estimado diferente al utilizado para proyectar el PAE? Esta inconsistencia evidencia, como mínimo, un error técnico en la planeación presupuestal, que no es menor



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

en términos de monto y genera una profunda preocupación. Más aún si se considera el historial de denuncias y cuestionamientos que ha tenido la ejecución del PAE en la ciudad. Una diferencia de esta magnitud pone en duda la rigurosidad de la planeación y abre interrogantes sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como sobre las condiciones reales de cobertura y calidad que se están garantizando para las y los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá.

Ahora bien, al continuar con el análisis de las principales preocupaciones, se evidencia una limitación significativa en materia de infraestructura educativa. A pesar de que el déficit en infraestructura escolar persiste, la administración ha decidido realizar un recorte en este rubro para la vigencia 2026. La administración planea la construcción de 4 colegios nuevos y 2 restituciones, con un presupuesto de \$174.621 millones, distribuido de la siguiente manera:

No.	Nombre del Colegio	Tipo de Proyecto	Valor Obra + Interventoría
1	Jaqueline – María Betsabé Espinal IED (Boíta)	Colegio nuevo	\$ 52.763.118.891
2	General Santander	Restitución	\$ 42.444.296.627
3	San Francisco Sede B FASE II	Restitución	\$ 11.850.973.243
4	Omaira Sánchez Garzón – Fontanar del Río	Colegio nuevo Primera infancia	\$ 14.607.416.164
5	Gerda Westendorp Restrepo – Villas del Progreso (Cesión)	Colegio nuevo	\$ 41.550.724.486
6	María Anatilde Bulla Nivia -Theillard de Chardain – La Carolina	Colegio nuevo Primera infancia	\$ 11.404.870.771

Fuente: Respuesta derecho de Petición S-2025-352839

Al preguntar a la Secretaría por su decisión de recortar el presupuesto de infraestructura, argumenta que la política de la administración busca *“lograr el mayor impacto con el menor recurso posible”* y reasignar fondos para concentrarse en su principal objetivo: mejorar la calidad educativa. Sin embargo, esta visión desconoce que la calidad también depende de las condiciones materiales en las que estudian niñas, niños y jóvenes. Resulta contradictorio hablar de calidad educativa mientras persisten sedes con graves problemas de infraestructura, sin mantenimiento adecuado, con fallas en servicios básicos o incluso con riesgos estructurales.

Adicionalmente, es importante señalar que la SED toma esta decisión cuando el avance en la meta del PDD de construir 16 colegios nuevos apenas llega al 18%: al 30 de septiembre de 2025 solo se han entregado 3 nuevas instituciones. De igual forma, la meta de restituir 12 colegios alcanza únicamente un 8%, es decir, solo se ha restituido 1 colegio. Bajo este panorama, no sorprende que durante este año se hayan conocido múltiples denuncias por parte de las comunidades educativas sobre condiciones indignas y peligrosas en las instituciones oficiales. Esto demuestra que no se trata de un asunto menor, sino de una urgencia que debe ser prioritaria en la inversión pública.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Finalmente, respecto al tema de infraestructura queremos señalar que la administración plantea que, en esta materia, es posible gestionar recursos a través de otras fuentes, como las Alianzas Público-Privadas (APP). Este planteamiento confirma la continuidad de una política que privilegia la participación del sector privado en la financiación y ejecución de la infraestructura educativa, en lugar de fortalecer de manera decidida la inversión pública directa. Esta orientación no solo profundiza la dependencia del sector privado, sino que también debilita el papel del Estado como garante del derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Esto resulta especialmente preocupante en una ciudad que aún enfrenta profundas brechas en el acceso y en las condiciones materiales de sus colegios oficiales.


En conclusión, los errores e inconsistencias presentados por la administración en la proyección de los rubros impiden conocer con claridad cuál será la destinación real de los componentes presupuestales. Esta falta de precisión limita la capacidad de evaluación, seguimiento y toma de decisiones informadas por parte del Concejo y de la ciudadanía.

### **Universidad Distrital**

El presupuesto de la Universidad Distrital también evidencia limitaciones. En el proyecto que nos ha presentado la administración plantea un total de \$545.641 millones para la UD durante 2026, estos recursos están divididos en aquellos que son propios de la universidad y en las transferencias que realiza la administración distrital.

En ese sentido, el presupuesto actual plantea que para 2026 se proyecta una reducción significativa en los recursos propios de la universidad, que pasarían de \$199.009 millones a \$110.433 millones, lo que representa una disminución del -44,51% en los ingresos provenientes de rentas. Sin embargo, la forma en que se presenta esta comparación resulta imprecisa, pues enfrenta el presupuesto definitivo a septiembre de 2025 con el presupuesto inicial de 2026, sin considerar que el valor de 2025 incluye recursos adicionales que ingresaron a lo largo del año por diferentes rubros no contemplados inicialmente, envía un mensaje equivocado. En ese sentido, es importante aclarar que los recursos propios de la Universidad en el presupuesto inicial de 2025 fueron de \$103.988 millones, por lo que no existe una reducción si hablamos de presupuestos iniciales, por el contrario, existe un aumento de \$6.445 millones correspondientes a recursos propios de la universidad.

Respecto a las transferencias realizadas por la administración distrital, estas pasarían de \$413.085 millones a \$435.207 millones, lo que representa un aumento del 5,36%. Sin embargo, este componente se constituye de dos rubros:

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

I.La Estampilla Pro-Universidad Distrital, que pasaría de \$34.668 millones a \$39.686 millones, y que se caracteriza porque sus recursos solo pueden destinarse a inversiones de la universidad; y

II.El aporte ordinario de la administración, que varía de \$378.417 millones a \$395.521 millones.


Lo anterior significa que, en términos de aportes ordinarios que el Distrito realiza a la Universidad, la variación es de tan solo \$17.104 millones, lo que equivale a una variación del 4,52%. En otras palabras, la variación proyectada corresponde estrictamente a lo establecido por la Ley 30 de 1992, es decir, el ajuste mínimo equivalente al IPC.

Si revisamos en detalle las variaciones históricas de los aportes ordinarios de la administración distrital a la Universidad, encontramos que, en condiciones normales, desde 2015 no se habían registrado variaciones iguales o inferiores al IPC. Es decir, desde ese año la administración había venido otorgando aumentos superiores al IPC que fortalecen la base presupuestal de la UD. Los únicos dos años en los que la variación fue menor fueron 2021 y 2022, en plena pandemia. Esto significa que, fuera de ese contexto excepcional, no se habían presentado variaciones tan bajas como las que hoy propone la administración distrital. De hecho, en 2023 y 2024 la variación estuvo casi 10 puntos por encima del IPC.

Este panorama implica que no existe una verdadera inyección de recursos en la base presupuestal de la Universidad Distrital. En la práctica, no se está aumentando el presupuesto de la institución, sino manteniendo el mismo monto y actualizándose al valor presente para 2026, es decir que la universidad funciona con el mismo presupuesto del año anterior teniendo necesidades nuevas. Esta decisión política de la administración acarrea múltiples problemáticas, pues es imposible cubrir únicamente con el ajuste del IPC los costos reales de funcionamiento de la UD.

Adicional, debe recordarse que los principales componentes del gasto (como los salarios docentes, que representan el 47,46% del funcionamiento; los salarios administrativos, que corresponden al 6,07 %; y las pensiones y demás obligaciones asociadas, que constituyen el 18,94%) no crecen al ritmo del IPC, sino a tasas mayores. Por tanto, limitar el incremento presupuestal al índice inflacionario desconoce la dinámica real de los costos universitarios y pone en riesgo la estabilidad financiera y operativa de la institución.

Adicionalmente, la administración desconoce el proceso que actualmente atraviesa la Universidad Distrital. Durante el presente año se aprobó la Reforma al Estatuto General, un

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


avance significativo para la educación pública en Bogotá y, al mismo tiempo, un reto estructural que exige una inversión considerable. Esta reforma implica transformaciones profundas en el gobierno universitario, la participación estudiantil y la estructura académica, las cuales no pueden implementarse sin recursos adicionales.

Según estimaciones preliminares, la Universidad requiere al menos \$5.000 millones para iniciar la ejecución de la reforma. Estos recursos deben ser entendidos como gastos nuevos y, por lo tanto, como parte de las necesidades estructurales del funcionamiento institucional. En ese sentido, no es razonable pretender que la universidad “revise” internamente de qué rubros podría extraer recursos para implementar parcialmente la reforma. Por el contrario, su financiación debe garantizarse de manera específica, suficiente y oportuna desde la planeación presupuestal del Distrito.

El problema, entonces, no radica en el aumento salarial por encima del IPC ni en la adopción de una reforma orientada a democratizar la universidad pública. El verdadero problema es que la administración de Galán (coherente con una lógica neoliberal que privilegia la austeridad sobre la inversión social) continúa otorgando a las universidades públicas únicamente los recursos mínimos para sostener su funcionamiento básico, limitando así cualquier posibilidad de mejorar la calidad y ampliar el alcance de la educación superior pública en Bogotá.

Es necesario recordar a la administración que los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 establecen únicamente los mínimos presupuestales para las universidades públicas. En consecuencia, corresponde a la voluntad política del gobierno distrital decidir si fortalece o no la base presupuestal de la Universidad Distrital, garantizando su funcionamiento adecuado y un desarrollo real que responda a las necesidades de la ciudad y de su comunidad universitaria.

En definitiva, la decisión de la administración de no fortalecer la base presupuestal de la Universidad Distrital, de limitarse a actualizaciones inflacionarias y de desconocer las necesidades reales derivadas de la Reforma al Estatuto General, evidencia una orientación política clara: el gobierno de Galán prefiere concentrar los recursos públicos en fortalecer al sector privado, mientras deja a la universidad pública en una situación de precariedad financiera estructural. Esta postura no es nueva; por el contrario, constituye la continuidad de un proyecto que, por acción u omisión, busca que la universidad pública se marchite lentamente, restringiendo su capacidad de crecer, de democratizarse y de ofrecer educación de calidad para las mayorías. Frente a ello, resulta indispensable defender con firmeza la financiación pública, suficiente y sostenible, como condición para garantizar el futuro de la Universidad Distrital y de la educación superior pública en Bogotá.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

## Sector Seguridad


Tal como hemos señalado en varias ocasiones, y coincidiendo con las valoraciones de ONG's y organizaciones dedicadas al seguimiento de la política de seguridad en Bogotá, la gestión de esta cartera por parte de la administración de Carlos Fernando Galán ha sido muy deficiente. Tenemos una Secretaría y una administración que se dedica más a la producción de pantallas comunicativas que a la gestión de estrategias de mediano y largo plazo que generen resultados sostenibles en el tiempo, rehusando a la coordinación interinstitucional entre entes territoriales con tal de sostener una narrativa en la que la administración se muestra incapaz de generar resultados por la desidia del gobierno nacional. El resultado de este modelo de administración es una ciudad en la que los indicadores de seguridad están lejos de las metas del PDD, sin que se tenga, como su predecesora, la excusa de la pandemia.

De esta manera, cada vez que un hecho delictivo genera un impacto mediático o en redes sociales la respuesta de la Secretaría de Seguridad es lanzar una nueva estrategia que responda al entorno del crimen, estrategias que pocas veces tienen una duración sostenida en el tiempo y que no presentan resultados que se compadezcan con los recursos que se dedican a ella, más allá de la presentación pública de criminales capturados que se hizo rutina en esta alcaldía.

Para ilustrar lo anterior nos permitimos presentar dos ejemplos: en cuanto al performance de la seguridad, son de recordación las “megatomas” en las que el alcalde en persona, acompañado de un centenar de funcionarios y uniformados proponía una puesta en escena de patrullaje e interacción con la ciudadanía; no se volvieron a hacer (perdieron su arrastre mediático, que es lo que parece importarle a esta administración) y, mientras se realizaron, sus resultados son inocuos a sol de hoy:

Se realizaron 22 de estas actividades, las zonas intervenidas incluyen Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Engativá y Usme, además de terminales de TransMilenio y portales (p. ej., Portal Américas, Portal Usme, Portal Suba); cada jornada integraba operativos de Policía Metropolitana, Ejército (BRIGADA XIII) y dependencias distritales como Gobierno, Movilidad, UAESP, Integración Social, Salud, DA-DEP, IDIPRON e IPES.

Lo cierto es que en las zonas intervenidas no se observa una reducción sostenida de hurtos ni de violencia interpersonal; por el contrario, el *Boletín de seguridad* a septiembre de 2025 muestra que el hurto a personas aumentó en 3 % y las lesiones personales en 6,8 %, lo


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

que indica un impacto limitado o temporal; las localidades con presencia reiterada de megatomas, como Ciudad Bolívar y Suba, siguen concentrando incrementos en homicidios (15,7 % y 16,1 % respectivamente) y, como corolario, la SSCJ reconoce que no existen indicadores específicos que midan la eficacia de cada megatoma, ni trazadores presupuestales ni sociales asociados, en síntesis, un show sin resultados.

Otro ejemplo es el de la cifra de homicidios del último mes registrado, lo cual fue ampliamente publicitado como logro por parte del alcalde, revisemos a detalle: septiembre sí es el mes con menos homicidios desde que hay registro mensual y cae -36,4% con respecto a septiembre de 2024; sin embargo, en el acumulado de enero a septiembre la variación es una reducción del 0,1% (prácticamente plana), lo cual es preocupante considerando que el 2024 fue el año con más homicidios en casi una década en la ciudad, en otras palabras, el homicidio sigue con números sostenidos y preocupantemente elevados, lo cual nos deja muy lejos de la promesa de llevar el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes a cifras de un dígito.

Es en este panorama en el que deben evaluarse las propuestas de inversión contenidas en el presupuesto del año 2026 y, para completar el panorama, es importante tener en cuenta algunos indicadores, extraídos del boletín publicado por la SSCJ a septiembre de 2025:

- Aun con el casi-estancamiento anual de las cifras de homicidio, es preocupante que suben fuerte en Rafael Uribe Uribe (50,0%), San Cristóbal (47,6%), Suba (16,1%) y Ciudad Bolívar (15,7%), reafirmando la crítica sobre “islas de riesgo” que requieren intervención diferencial y coordinada con el gobierno nacional, pues su control se da por bandas que obedecen a lógicas transnacionales.
- El hurto a personas creció en 3,0% entre enero y septiembre del 2025 y en septiembre salta un 12,4% respecto del mismo mes del año pasado; es el delito masivo que presiona la sensación de inseguridad, como se ha advertido.
- Las denuncias por violencia intrafamiliar crecen 18,8% en lo que va corrido del año. En clave de género y prevención, esto es una alerta mayor y evidencia la ineficacia del gasto ejecutado en el componente de género del sector seguridad.
- En el agregado la extorsión está cayendo (un 20,2% en lo que va del año y un 76,3% respecto del último septiembre, pero hay focos donde aumenta alarmantemente: crece (en el acumulado) en localidades como Tunjuelito (150%), Usme (31,6%) y San Cristóbal (20,5%), lo cual es un indicador de la focalización del control territorial ejercido por organizaciones criminales.


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

- El propio boletín advierte un aumento de registros “sin localización” en SIEDCO que afecta la comparabilidad y la georreferenciación; por ejemplo, en violencia intrafamiliar los casos “sin localización” se disparan en el acumulado, a pesar de ello, este presupuesto presenta un decrecimiento del 11,82% en el rubro de información estadística.

A este enfoque cuantitativo hay que añadir un análisis cualitativo que tiene que ver con el entendimiento del fenómeno criminal en la ciudad, la administración constantemente presenta capturas y “desarticulaciones” de bandas de escala barrial o local, sin que se hayan presentado resultados contundentes en cuanto a la desarticulación de las conexiones de estos grupos con las grandes corporaciones transnacionales del crimen que se disputan el narco y microtráfico en la ciudad: el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia y el Tren de Aragua. Si bien hay un acercamiento muy reciente del gobierno nacional para intentar establecer las condiciones del sometimiento del primero de estos grupos, no hay ningún proceso de ese tipo con el segundo y, en vez de articular capacidades y estrategias con el gobierno nacional, el alcalde se ha dedicado a trasladar la responsabilidad al Gobierno central. Priorizar esa pelea política por encima de los intereses de los bogotanos nos tiene hoy con estos indicadores y hace fútil el espectacular aumento presupuestal para el fortalecimiento de los programas enfocados en la política criminal.

Asimismo, dentro de este presupuesto se incluye el proyecto *“Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C.”* con un rubro de inversión de \$ 90.329 millones, con los cuales se planea contratar a 678 nuevos gestores del orden (en adición a los 270 que ya fueron incorporados en 2025), lo anterior, en reemplazo de los 2.000 nuevos policías que no van a poderse incorporar.

Bogotá enfrenta un déficit de más de 8.000 policías, pero en lugar de fortalecer estrategias comunitarias que liberen pie de fuerza, la administración Galán impulsa la creación de 1.700 “Gestores del Orden”, una figura civil con funciones poco claras y que se superpone con equipos ya existentes como gestores de convivencia, diálogo social, defensa del espacio público e incluso cuerpos de investigación. Sin una matriz de deslinde que precise responsabilidades y evite duplicidades, el Distrito corre el riesgo de pagar doble por tareas que ya realiza, además, aunque inicialmente se propuso que estos equipos estuvieran conformados por exmilitares y expolicías, la falta de filtros sólidos en derechos humanos abre la puerta a que los seleccionados provengan principalmente de fuerzas con tradición coercitiva, lo que convertiría esta figura en un dispositivo de control social con apariencia de civilidad.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Las alertas no son hipotéticas: la experiencia piloto de los “Guardianes del Orden” evidenció acoso laboral, tareas ajenas al contrato, pagos condicionados y exposición a riesgos sin formación, acompañamiento policial ni cobertura adecuada de ARL. A nuestro despacho llegaron denuncias de personas enviadas a operativos de microtráfico o a levantar cambuches sin inducción ni protocolos, poniendo en riesgo su integridad. Hoy, el programa se implementa sin límites claros frente a otras figuras, sin protocolos robustos, sin filtros estrictos de derechos humanos y con antecedentes de precarización, antes de seguir incorporando guardianes, la administración debería publicar el decreto completo, los manuales de funciones, los protocolos y los mecanismos de control ciudadano; de lo contrario, los “Gestores del Orden” serán más un recurso teatral (y potencialmente autoritario) que una verdadera solución de seguridad.

En cuanto a la ejecución presupuestal, esta administración, en su cartera de seguridad ha sido absolutamente errática y ha demostrado una gran incapacidad para ejecutar los recursos que tiene a su disposición. Para 2024 se le asignó a la SSCJ un presupuesto de inversión de un poco más de \$195.000 millones, del cual ejecutó en todo el año solo el 40,4%. Para este año (2025) tenían muchísimos más recursos: casi \$450.000 millones y de eso, a septiembre de este año solo han ejecutado el 22,4%. Semejante grado de ineficiencia debería ser objeto de control fiscal.

Para 2026, el programa tendría un presupuesto de \$90.329 millones, de los cuales \$81.738 millones provendrían de cupo de endeudamiento. Es decir, la administración pretende endeudar a Bogotá para pagar una estrategia improvisada, sin protocolos claros, sin matriz de deslinde con otros equipos distritales, sin filtros estrictos en derechos humanos y con antecedentes inmediatos de precarización laboral en el piloto de los “Guardianes del Orden”. Usar deuda para financiar una figura que aún no demuestra utilidad, que no resuelve el déficit estructural de policía y que incluso puede duplicar funciones existentes es fiscalmente irresponsable, significa comprometer recursos futuros de la ciudad para sostener un programa que puede terminar siendo más una apuesta comunicativa que una política seria de seguridad. Endeudar a Bogotá debería ser la última opción y solo para inversiones estratégicas y sostenibles, no para cubrir una iniciativa cuya viabilidad operativa, impacto real y control ciudadano siguen siendo, a la fecha, un enigma.

El proyecto *“Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el sector”* disminuye de un poco más de \$1.200 millones (vigente a septiembre de 2025) a \$1.000 en 2026 (una reducción del 11,82%). Este componente agrupa el levantamiento y actualización de información estadística de calidad y el desarrollo de un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. En términos de gestión



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


por resultados, la consistencia entre el crecimiento de los programas operativos y el financiamiento del sistema de información resulta necesaria para garantizar insumos de focalización, seguimiento y evaluación de intervenciones; por ello, desde el punto de vista técnico, conviene alinear el nivel de apropiación del proyecto de información con el incremento global de inversión, preservando al menos su nivel 2025 o definiendo un plan de fortalecimiento explícito como condición de ejecución.

## Sector Gobierno

El cuello de botella de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) está en la baja ejecución de los Fondos de Desarrollo Local (FDL). Con el marco normativo de Presupuestos Participativos (PP) ordenando que el 50% de la inversión de las alcaldías locales 2025-2028 se ejecute vía PP, la línea de base 2025 es débil: a 30 de junio solo se habían comprometido \$4.127 millones del componente PP en toda la ciudad, pese a que ya se habían priorizado 1.891 propuestas y el CONFIS había adoptado categorías y reglas de gasto (Circular 04 de 2024); la propia Secretaría Distrital de Hacienda señala que, con ese marco, los acuerdos participativos deben quedar programados en el anteproyecto 2026 y convertirse en proyectos de inversión locales; la brecha entre esa obligación programática y los compromisos reales evidencia rezagos en formulación, estructuración y contratación local que la SDG debe corregir antes de ampliar apropiaciones.

El corte a septiembre de 2025 la ejecución confirma que varias localidades están por debajo de umbrales prudentes de avance, por decir lo menos. Ejemplos: Antonio Nariño registra inversión 29,34% y funcionamiento 37,37%; Chapinero, 30,96% y 41,67%; Los Mártires, 33,63% y 47,88%; Fontibón, 35,62% y 37,98%; y Sumapaz, 23,81% y 46,73%. Estos patrones implican riesgo de que mayores apropiaciones no se traduzcan en ejecución efectiva sin acciones de gestión (fortalecimiento de capacidades operativas, depuración de cuellos de botella contractuales y programación realista de cronogramas), en conjunto, estos valores describen un patrón de bajo avance que no justifica incrementos netos en 2026 sin medidas de gestión: asistencia técnica directa a alcaldías locales para maduración de proyectos, estandarización de pliegos/tipos contractuales, y un plan de choque de formulación y precontractual focalizado en PP y en metas con rezago.

Desde el lado del presupuesto 2026 de la SDG, la programación privilegia proyectos de “fortalecimiento” (gestión administrativa/operativa, fortalecimiento tecnológico e institucional, relaciones estratégicas, etc.) por alrededor de \$36.000 millones, tras registrar compromisos acumulados cercanos a \$31.900 millones en 2025, el énfasis es razonable si y sólo si se orienta a cerrar la brecha de ejecución local: fortalecer gestión local (\$9.900 millones), gestión administrativa (\$15.800 millones) y capacidades tecnológicas (\$5.000 millones)

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

debe traducirse en mayor tasa de compromiso/giros de los FDL, particularmente en PP; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en gasto inicial de apoyo sin impacto en las cifras críticas de inversión territorial. Condicionar incrementos a hitos de gestión (por ejemplo, % de proyectos PP validados técnicamente y con expediente contractual listo por localidad; tiempos de trámite; % de contratos adjudicados) haría consistente la ampliación de apropiaciones con resultados.

En síntesis, el juicio crítico no es “menos plata a Gobierno” per se, sino “más gestión por cada peso”: con PP obligando una senda del 50% de la inversión local y con evidencias de ejecución rezagada en varias localidades, el ajuste 2026 debe priorizar:


- I. asistencia técnica y estandarización contractual para acelerar PP,
- II. metas de desempeño vinculantes para liberar recursos adicionales, y
- III. un plan de depuración de proyectos no viables que hoy inmovilizan cupos. Solo así la SDG podrá respaldar aumentos selectivos con eficacia verificable en los FDL.

## **VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

El Concejo de Bogotá es competente para discutir este proyecto de acuerdo con base en lo establecido en el numeral 4 del artículo 12 y en el Título IX del Decreto-Ley 1421 de 1993, y las normas que lo modifican.

## **VII. IMPACTO FISCAL**


El Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025, como presupuesto anual del Distrito, implica por definición un impacto fiscal directo, en tanto establece el marco legal para comprometer, garantizar y ejecutar recursos públicos durante la vigencia 2026. Su aprobación habilita apropiaciones en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, lo que modifica de manera explícita la senda financiera distrital proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Toda decisión contenida en el proyecto (desde la asignación sectorial hasta la autorización de gastos operativos, pasando por la incorporación de vigencias futuras y el reconocimiento de obligaciones contractuales) tiene efectos verificables sobre el balance fiscal del Distrito, la programación presupuestal plurianual y la sostenibilidad de la deuda. En consecuencia, el proyecto no puede ser comprendido únicamente como un instrumento administrativo de distribución de recursos, sino como un determinante de la trayectoria financiera y del margen de maniobra fiscal de la ciudad para los años subsiguientes.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA	CÓDIGO: GNV-FO-002
	PRESENTACIÓN PONENCIAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Adicionalmente, el presupuesto anual afecta la estructura de riesgos fiscales del Distrito, en especial aquellos asociados a compromisos multianuales, dinámicas de recaudo, variaciones macroeconómicas y obligaciones contingentes. El aumento o reducción de apropiaciones sectoriales, la priorización de proyectos de infraestructura, la programación del gasto social y la incorporación de fuentes como el crédito público generan consecuencias sobre la capacidad futura del Distrito para atender presiones operativas, financiar nuevas iniciativas o responder a choques económicos externos.

### **VIII. CONCLUSIÓN**

Con base en todo lo expuesto, especialmente en el acápite de la conveniencia del proyecto de acuerdo, me permito rendir ponencia **NEGATIVA** al Proyecto de Acuerdo 1004 DE 2025 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones”

  
**HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO**  
 Concejal de Bogotá  
 Ponente